

Un entorno internacional desafiante: ¿Qué oportunidades y desafíos para América Latina?

Category: Latin America, Posts in Spanish
written by oecdectoscope | June 8, 2022



Por Jens Arnold, Aida Caldera, Priscilla Fialho, Paula Garda, Alberto González Pandiella and Alessandro Maravalle, Departamento de Economía, OCDE

Tras un fuerte repunte en 2021, la recuperación económica de América Latina se ralentizará. La propagación de Omicron, los prolongados cuellos de botella en las cadenas de suministro mundiales, la inflación más alta y generalizada, el endurecimiento de las condiciones financieras en la región y en el extranjero, junto con una demanda mundial más débil, contribuyeron a debilitar la demanda interna en los primeros meses del año. La recuperación parcial de los mercados de trabajo, con salarios, empleo y niveles de participación que se mantienen por debajo de los niveles pre-pandemia en muchos países, no ha sido suficiente para compensar la retirada de las medidas extraordinarias de apoyo en algunas economías latinoamericanas y el aumento de los precios.

La invasión de Ucrania está desacelerando la economía mundial y contribuyendo a agravar las presiones inflacionarias, aumentando la incertidumbre para la región. Ahora se prevé que

el crecimiento del PIB mundial se ralentice bruscamente hasta el 3% en 2022 (desde un 4.5% que se preveía en diciembre 2021) y 2.75% en 2023. Las cuarentanas en China, junto con la guerra, está prolongando las interrupciones en las cadenas de valor y el comercio mundiales. Los precios de las materias primas han subido considerablemente, lo que ha aumentado la inflación en todas partes. Las proyecciones para la inflación se encuentran ahora en torno al 9%, el doble de lo que pronosticábamos en diciembre del año pasado. La inflación subyacente se moderará un poco, pero se mantendrá por encima de los objetivos en la mayoría de las principales economías a finales de 2023, a pesar de la normalización de la política monetaria.

En comparación con el resto del mundo y las economías avanzadas de la OCDE, el crecimiento de América Latina corre el riesgo de quedarse atrás en los próximos años (Cuadro 1), comprometiendo la convergencia hacia niveles de vida más altos. En relación a nuestras proyecciones de diciembre de 2021, para las seis principales economías de América Latina, el crecimiento del PIB se ha revisado a la baja en 0,7 puntos porcentuales en 2022 y 0,6 puntos porcentuales en 2023, mientras que, excluyendo Argentina, la inflación se ha revisado significativamente al alza en 3,5 puntos porcentuales en 2022 y 2 puntos porcentuales en 2023. No obstante, existen algunas diferencias entre países. En Argentina y Colombia, el crecimiento del primer trimestre de 2022 resultó más fuerte de lo previsto, lo que llevó a una revisión al alza de las proyecciones.

Cuadro 1. Perspectivas económicas de los países de América Latina

	2021	2022	2023
PIB variación, %			
 Argentina	10.3	3.6	1.9
 Brasil	5.0	0.6	1.2
 Chile	11.9	1.4	0.1
 Colombia	10.7	6.1	2.1
 Costa Rica	7.8	3.2	2.6
 México	4.8	1.9	2.1
ALC-6	6.6	2.0	1.6
OCDE	5.5	2.7	1.6
Mundo	5.8	3.0	2.8

	2021	2022	2023
Inflación, %			
 Argentina	48.8	60.1	50.6
 Brasil	8.3	9.7	5.3
 Chile	4.5	9.0	5.2
 Colombia	3.5	8.4	5.4
 Costa Rica	1.7	5.7	5.6
 México	5.7	6.9	4.4
ALC-6	12.1	16.6	12.7
ALC-5 (excl. Argentina)	4.7	7.9	5.2
OCDE	3.7	8.8	6.1

Nota: América Latina (ALC) es la media ponderada por PIB a paridad de poderes de compra de los 6 países en la tabla para el PIB; y la media simple de los países incluidos en el cuadro para la inflación.

Fuente: OCDE Perspectivas Económicas No. 111, junio de 2022.

Se han exacerbado desafíos ya existentes y han surgido otros nuevos

Las economías latinoamericanas salieron de la crisis de COVID-19 con una mayor deuda pública como porcentaje del PIB y un espacio fiscal muy limitado. A medida que la inflación alcanza niveles altos en todo el mundo y los bancos centrales endurecen la política monetaria, sobre todo en Estados Unidos, esto supone una amenaza no despreciable para la estabilidad financiera de la región. El aumento de los costes de financiación a nivel mundial y nacional dificultará a los países latinoamericanos la refinanciación de la deuda, el cumplimiento de las obligaciones de la deuda externa y la financiación de las tan necesarias inversiones en infraestructuras y otras reformas pro-crecimiento, aunque la proporción de la deuda en moneda extranjera en las nuevas emisiones haya disminuido considerablemente. Los cambios bruscos en la orientación de la política monetaria de las economías avanzadas también podrían dar lugar a importantes salidas de capital y a la depreciación de la moneda, exacerbando las presiones inflacionistas internas. Una desaceleración significativa del crecimiento en China también podría repercutir en el comercio y el crecimiento de la

región.

Los hogares de bajos ingresos, que todavía están luchando por el impacto económico de la pandemia, se están viendo muy afectados por el aumento de los precios de los alimentos y la energía. En una región con niveles históricamente altos de desigualdad, y donde muchos todavía están luchando por recuperarse de la pandemia, esto está añadiendo presión a los gobiernos para que refuercen el apoyo social y aumenten el gasto público para reducir el riesgo de malestar social. La mayoría de los países han respondido al aumento de la inflación intentando influir directamente en los precios: reducción de los aranceles a la importación de productos agrícolas y otros bienes básicos (Brasil, Colombia, México), medidas de reducción de impuestos (Argentina, Brasil, México, Perú), aumento de las subvenciones a la energía (Argentina, Chile, Perú) o medidas para aumentar la producción de granos básicos (México). La reducción de los aranceles de importación es bienvenida y podría incluso hacerse permanente. Los gobiernos deberían tratar de ampliar temporalmente los programas de transferencias monetarias específicas para apoyar a los hogares más vulnerables, como ha hecho Chile.

Algunas señales de esperanza

En el caso de los exportadores netos de materias primas, como Brasil y Colombia, el aumento de los precios del petróleo, los minerales y la agricultura ha mejorado los resultados fiscales, aliviando temporalmente las presiones fiscales. La relación de intercambio también ha mejorado para estos países, apoyando a los sectores exportadores, lo que ha impulsado las entradas de capital. Sin embargo, para los importadores netos de materias primas, como Costa Rica, la relación de intercambio se ha deteriorado, perjudicando las perspectivas de crecimiento a corto plazo. La guerra en Ucrania también ha llevado a los inversores a reequilibrar sus carteras a expensas de Rusia y de los países de Europa Central altamente expuestos a Rusia, en beneficio de algunas economías

latinoamericanas, como Brasil. Estas entradas de capital han servido de apoyo a la moneda local y han contenido la inflación importada hasta ahora, aunque no se puede descartar una posible reversión a medida que las economías avanzadas endurezcan su política monetaria.

La guerra en Ucrania también está afectando a la dinámica del comercio mundial, sobre todo cuando las exportaciones rusas tenían una cuota de mercado considerable. En el caso de algunos productos, como los cereales y los minerales, algunos países latinoamericanos están bien situados para mitigar el choque de la oferta, como Argentina, Brasil o Colombia. Esto podría ser una oportunidad para mejorar los resultados de las exportaciones y establecer vínculos comerciales duraderos con nuevos socios comerciales. Al mismo tiempo, los últimos acontecimientos han aumentado el apetito por la deslocalización, lo que podría jugar a favor de la región dada su proximidad al mercado norteamericano. El comercio podría convertirse en un importante pilar para la recuperación económica de la región y sus futuras perspectivas de crecimiento.

Conseguir el equilibrio de políticas adecuado

Los gobiernos latinoamericanos deberían responder a este entorno especialmente desafiante y aprovechar las oportunidades existentes. El apoyo fiscal para compensar a los hogares vulnerables por el aumento de los precios de la energía y los alimentos debería ser temporal y específico, para evitar poner en peligro los esfuerzos de consolidación fiscal. Rompiendo con el pasado, esta vez los ingresos adicionales de las materias primas deberían utilizarse con prudencia, por ejemplo para reducir la deuda pública, ya que las perspectivas de crecimiento son inciertas y también lo es la evolución futura de los precios de las materias primas. Los bancos centrales deben seguir vigilando la situación y estar dispuestos a seguir subiendo las tasas de interés oficiales para evitar un desanclaje de las expectativas de inflación.

Por último, los gobiernos deben abordar los obstáculos que desde hace tiempo se oponen a la integración comercial, como las deficiencias de las infraestructuras, las barreras arancelarias y no arancelarias que aún existen o la falta de mano de obra cualificada. Esto será clave para un crecimiento económico y de las exportaciones amplio e inclusivo. Debe prestarse mayor atención a las políticas medioambientales para garantizar una reducción progresiva de las emisiones de carbono.

Más información:

- **OECD Economic Outlook, Junio 2022** – Reporte completo en inglés con las proyecciones macroeconómicas, los principales desafíos estructurales e información detallada por país.
- **Perspectivas económicas de la OCDE, Junio 2022**
- Información detallada para Argentina | Brasil | Chile | Colombia | Costa Rica | México

América Latina tras el COVID-19: cómo impulsar una recuperación tan deseada

Category: COVID-19,Economic outlook,Latin America,Posts in Spanish,Uncategorized
written by oecdecoscope | June 8, 2022



Jens Arnold, Aida Caldera-Sánchez, Paula Garda, Alberto González Pandiella, Alvaro S. Pereira. Departamento de Economía, OCDE

América Latina es una de las regiones más golpeadas por el COVID-19 y tendrá una recuperación más lenta. La región ha concentrado cerca de 1 millón de muertes, o un tercio del total de muertes por COVID-19 en el mundo. En términos económicos también es la región que más se ha visto afectada en mundo con una caída del PIB de alrededor de 7% en 2020, comparado con 5% de media en la OCDE. Esto es debido a las características estructurales de la región: sistemas sanitarios y redes de seguridad social débiles, grandes sectores informales, fuerte dependencia del turismo, gran proporción del empleo en ocupaciones no compatibles con el trabajo a distancia, y un margen limitado para el apoyo fiscal. Hacia adelante la OCDE prevé que el crecimiento de seis grandes economías de la región, que abarcan alrededor del 85% del PIB de América Latina, sea del 4.9% en 2021, y un 2.8% en 2022 (Tabla). La recuperación de la actividad económica se ha frenado a inicios del 2021, frente a las nuevas medidas de contención en la mayoría de los países de la región, y se retomará a medida que avanzan los procesos de vacunación y mejora la situación sanitaria. Pero la recuperación será gradual, sin recuperar el terreno perdido en el PIB per-cápita ni siquiera en 2022 (Gráfico 1).

Existe una alta incertidumbre en torno a la evolución de la pandemia y los procesos de vacunación, así como importantes vulnerabilidades. La prioridad inmediata en la región debe ser evitar más brotes del COVID-19, fortaleciendo los sistemas de

salud y acelerando la vacunación, siguiendo el ejemplo de Chile que ha visto uno de los procesos de vacunación más rápidos del mundo. En este sentido, la cooperación internacional y la efectiva distribución de vacunas a través de COVAX será crucial. En algunas economías de la región el incremento de los precios de las materias primas está dando un respiro a las apretadas arcas fiscales y un viento de cola a la inversión y al crecimiento económico. El aumento de las remesas y el crecimiento de la economía global también apoyan positivamente, particularmente a las economías más abiertas. Sin embargo, la región tiene cuentas fiscales frágiles y es muy sensible a cambios en las condiciones financieras globales, como se vio a inicios del 2021. Episodios de violencia y malestar social, presentes desde antes de la pandemia, siguen siendo un riesgo más que vigente, que podrían retrasar la recuperación. El incremento de la deuda pública, debido a los esfuerzos que han hecho muchos países para paliar los efectos negativos del COVID-19, dejan sólo un estrecho margen para la política fiscal, si no se hacen reformas (como ya lo discutimos aquí), y es una de las principales vulnerabilidades en la región. Asimismo, se aproximan años de elecciones en varios de los países de la región. Todos esos factores crean un ambiente de incertidumbre y volatilidad.

Para lograr la tan deseada recuperación, América Latina tiene que revertir el impacto negativo de la pandemia y continuar reduciendo la pobreza y las desigualdades, que ya eran altas antes de la pandemia. Las cifras en algunos países de la región ya comienzan a mostrar que la pobreza y la desigualdad de ingresos se han incrementado, con pérdidas de empleo que alcanzan a más de 14 millones de personas desde que empezó la pandemia. Los más vulnerables fueron los más afectados: las mujeres, los más jóvenes, y los trabajadores informales (Gráfica 2, panel A). La recuperación del empleo es incipiente, pero está liderada por los informales, amenazando con un aumento persistente de la informalidad. Y esto es aún más grave para los jóvenes, ya que los primeros trabajos

tienden a tener impactos duraderos en sus carreras y salarios.

El cierre de las escuelas puede tener graves consecuencias a largo plazo. Con 300 días de escuela perdidos, el doble de la media de países OCDE (panel B), América Latina ha sido la región del mundo donde las escuelas han estado más tiempo cerradas. A día de hoy, unos 114 millones de estudiantes siguen sin poder asistir en persona. El efecto es aún más negativo para los más vulnerables, aquellos que no tienen acceso a educación digital y conectividad, y a tantos niños de hogares más desfavorecidos que han abandonado la educación escolar por completo. Es probable que la pandemia amplíe las ya elevadas brechas de resultados educativos por nivel socioeconómico, impactando negativamente los salarios futuros y la productividad e incrementando fuertemente la desigualdad de oportunidades (como lo demuestran Lustig y coautores aquí). El cierre de escuelas limita además el crecimiento del empleo femenino, que ha sido uno de los más impactados por la pandemia.

Es más urgente que nunca emprender reformas que permitan una rápida recuperación asegurando al mismo tiempo que nadie se quede atrás. Las transferencias monetarias, el mayor acceso a los beneficios de desempleo y/o subsidios al empleo y a la contratación son fundamentales para mitigar los impactos negativos de la crisis y acelerar la recuperación. Y más allá de la necesidad de mantenerlos hasta que la recuperación esté afianzada, este es el momento oportuno para repensar y fortalecer los mecanismos de protección social de forma permanente (como lo hemos hablado aquí). Esfuerzos para reducir la carga regulatoria son particularmente pertinentes en este momento ya que facilitarían la creación de empresas y empleos formales sin impactos significativos en los presupuestos. Como por ejemplo reduciendo los elevados costes de registro para las empresas (especialmente las PYMEs y las empresas nuevas), o costes laborales no salariales elevados (e.g. Colombia) o las contribuciones a la seguridad social

para los trabajadores de bajos ingresos (Argentina).

No menos importantes son mejorar la educación y los sistemas de capacitación. Programas de recuperación y para reintegrar en el sistema educativo a aquellos que lo abandonaron durante la pandemia son fundamentales para revertir los impactos negativos de los cierres de escuelas. Reasignar más recursos hacia las etapas más tempranas de la educación (preescolar y primaria) y la escolarización a jornada completa (e.g. Colombia) ayudaría a hacer los sistemas educativos de la región más equitativos y paliar los efectos de la pandemia. Reforzar los sistemas de capacitación ayudaría a los trabajadores, en especial a los más vulnerables, a encontrar trabajos de calidad en el mundo post-Covid.

Lo que la región haga ahora determinará la rapidez con la que se recupere y el tipo de recuperación. No es momento de retirar el apoyo fiscal a las economías y debilitar la incipiente recuperación, pero los países deben comenzar el proceso de discusión e identificación de las reformas para recomponer la situación fiscal. Una implementación creíble, que puede ser gradual, es clave para asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas y revertir los aumentos de pobreza y desigualdades. En muchos países de la región, la fuerte y necesaria acción de las políticas fiscales en apoyo de los más afectados dejará cuentas a pagar en el futuro. Los países tendrán que aumentar los ingresos fiscales y repensar algunos gastos existentes. En el actual contexto de incertidumbre en los mercados financieros, será importante reforzar la voluntad de pagar esa cuenta en el futuro para no afectar el acceso a financiamiento y aumentar los gastos con intereses, porque eso dejaría aún menos recursos para áreas prioritarias como salud, educación o protección social.

Con la recuperación afianzada se puede crear el consenso social para lograr una mayor progresividad tanto en los impuestos como en los beneficios sociales. Todos los países de la región tienen margen para incrementar la eficiencia del

gasto, focalizar el gasto social en los más vulnerables, incrementar la progresividad de los impuestos sobre la renta y reforzar la lucha contra la evasión fiscal. Incrementar el uso de impuestos verdes, siempre que se compense a los más vulnerables, tiene el doble beneficio de acelerar la transición hacia una economía baja en carbono e incrementar recursos fiscales. Fortalecer los marcos fiscales, incluyendo las reglas fiscales y los consejos fiscales independientes ayudaría a incrementar la credibilidad en la sustentabilidad de las finanzas públicas.

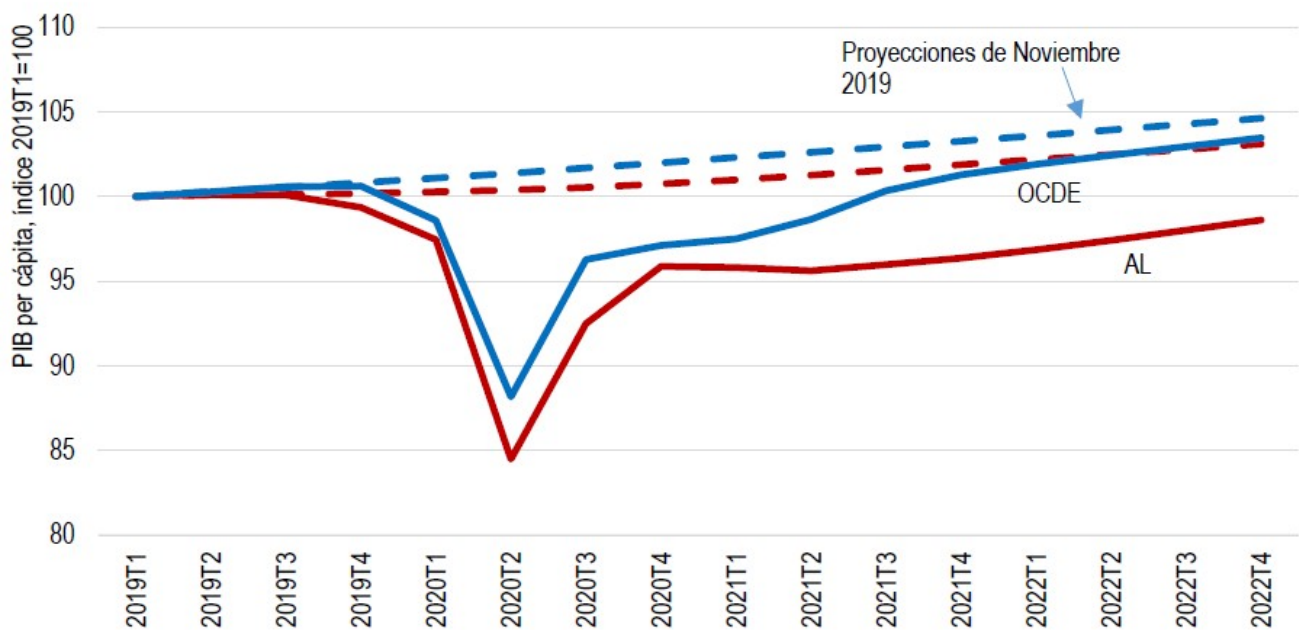
Tabla. Perspectivas Económicas para América Latina

	2019	2020	2021	2022
	PIB, volumen desestacionalizado, var. anual, %			
Argentina	-2,1	-9,9	6,1	1,8
Brasil	1,4	-4,1	3,7	2,5
Chile	0,9	-6,0	6,7	3,5
Colombia	3,3	-6,8	7,6	3,5
Costa Rica	2,2	-4,5	2,5	3,4
México	-0,1	-8,2	5,0	3,2
América Latina	0,6	-6,5	4,9	2,8
OCDE	1,6	-4,8	5,3	3,8
Mundo	2,7	-3,5	5,8	4,4

Nota: AL es la media ponderada por PIB a paridad de poderes de compra de los 6 países en la tabla.

Fuente: Perspectivas Económicas de la OCDE n. 109, mayo 2021.

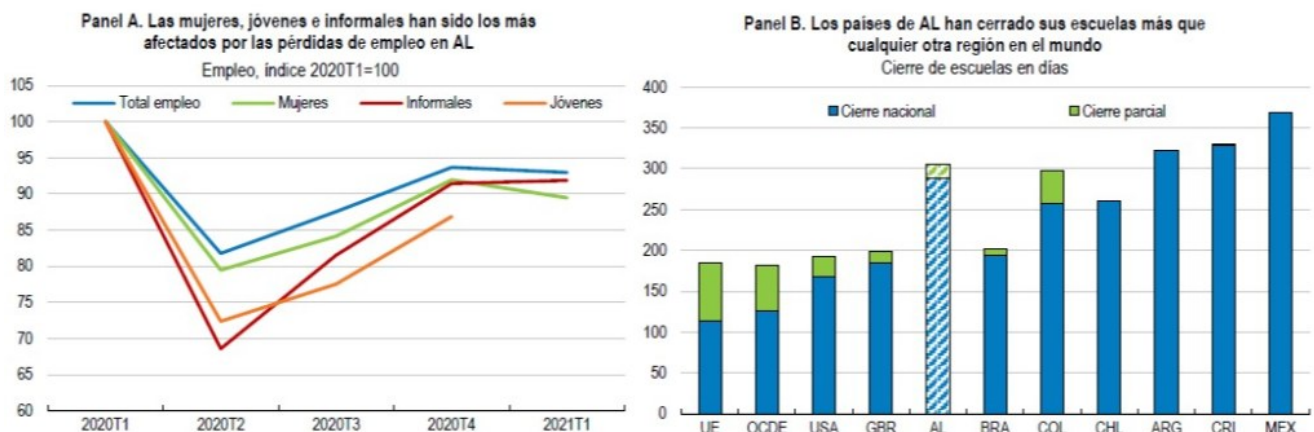
Gráfico 1. La pandemia está dejando un daño duradero en América Latina



Nota: AL se refiere a la media ponderada por PIB a paridad de poderes de compra de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica y México.

Fuente: Perspectivas Económicas de la OCDE N. 109, mayo 2021 y N. 106, noviembre de 2019.

Gráfico 2. El impacto desigual del COVID-19



Nota: En el Panel A, AL es el promedio simple de Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México. En el Panel B, AL es el promedio simple de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica y México. Informales medidos como trabajadores sin seguridad social, salvo en Colombia que son trabajadores en empresas de menos de 5 empleados. El cierre de escuelas se mide en días desde marzo 2020 hasta abril 2021. La definición de cierre parcial se refiere a sólo algunos niveles o categorías, por ejemplo, sólo la escuela secundaria, o sólo las escuelas públicas. Cierres regionales cuentan como $\frac{1}{2}$.

Fuente: Cálculos de la OCDE en base a Encuestas del Mercado laboral: INE- ENE para Chile, INEGI-ENEO nuevo y ENEO para México, DANE-GHEI-Mensual, IGEB-PNAD para Brasil, INDEC- EPH para Argentina y Oxford COVID-19 Government Response Tracker.

Para leer en más detalle sobre las proyecciones macroeconómicas, así como los principales desafíos estructurales ir al reporte en la o la versión español y portugués o versión inglés (que incluye proyecciones para todos los países de la OECD y principales desafíos).

Información detallada para estos 6 países con sus notas país correspondientes:

Argentina | Brasil | Chile | Colombia | Costa Rica | México

A Successful Journey: Costa Rica's Economic Reforms, 2015-2020

Category: Costa Rica, COVID-19, Latin America

written by oecdecoscope | June 8, 2022

By Alberto González Pandiella, Patrick Lenain, Mauro Pisu and Enes Sunel

On 15 May 2020, Costa Rica was invited to join the OECD as its 38th member, marking the successful completion of a thorough review by the organisation, including three OECD Economic Surveys (OECD, 2016; OECD, 2018a; and OECD, 2020). This “journey” towards accession involved multiple reforms to boost the country’s economic growth and distribute its benefits to all Costa Ricans. Thanks to these ongoing reforms, Costa Rica is better prepared to confront the COVID-19 crisis and to

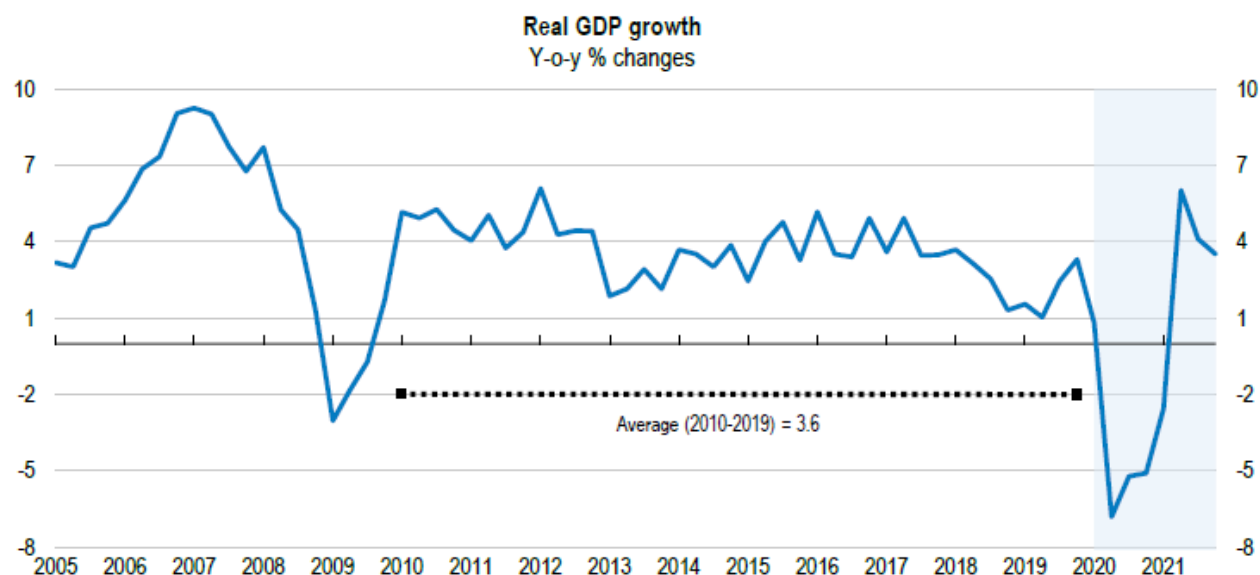
boost its long-term growth.

Steady and resilient growth

With a strong commitment towards trade openness, Costa Rica has attracted large inflows of foreign direct investment, helping to move up the value chain and upgrade the composition of its exports. The country has also been a magnet of international tourism thanks to its rich natural capital, especially its biodiversity and rainforest, and policies to protect it. These factors, together with rising real incomes, have sustained steady and resilient growth, with quick rebounds following exogenous shocks (Figure 1). Real GDP per capita has consequently tripled over the past 30 years and reached nearly USD 20 000 in 2019, close to the Latin American average (OECD, 2018a).

The COVID-19 outbreak has however inflicted a severe hit to economic activity, jobs, and the well-being of Costa Ricans. Innovative policy measures introduced to provide cash and liquidity support to households and firms will help to avoid long-term damages. However, the return to a normal situation is mired with very large uncertainties and depend on epidemiological developments and the speed of the global recovery.

Figure 1: Despite external shocks, growth has been steady and resilient



Note: Data for 2020 and 2021 reflect the "Single-hit" scenario described in the OECD Economic Survey of Costa Rica (2020).

Source: OECD Economic Outlook 107 database.

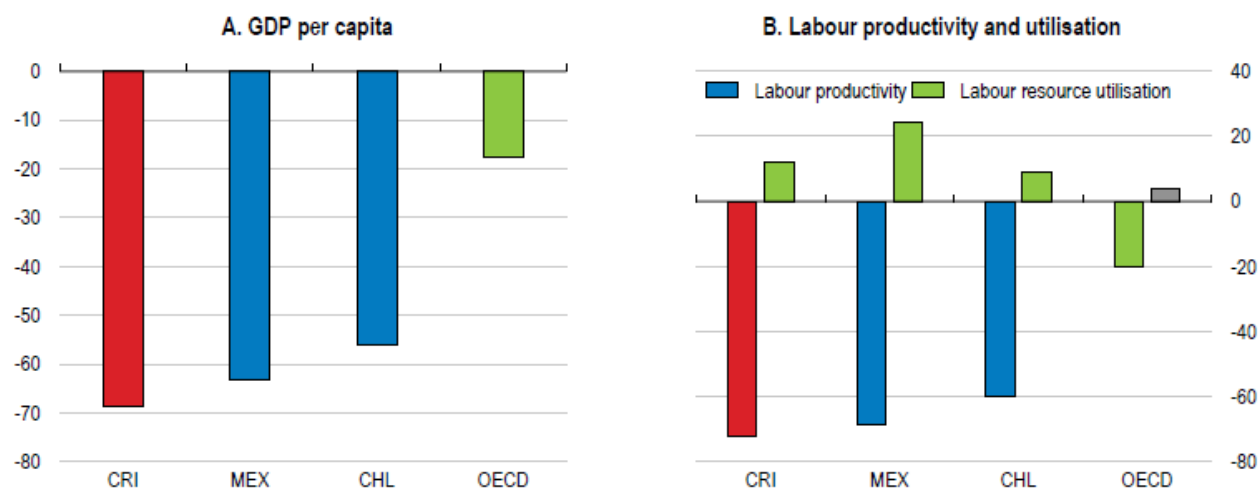
Recent reforms will boost the productivity of local firms

Apart from the coronavirus outbreak, Costa Rica faces several challenges to continue its past performance. The process of income convergence in emerging economies typically involves increasing productivity towards the "frontier" prevailing in advanced economies. However, in Costa Rica labour productivity growth has lagged peers for many years. Low productivity levels explain to a large extent the income gap with OECD countries (Figure 2). In 2016, GDP per hour worked was only USD 18.6 compared with an OECD average of USD 51.9 (OECD, 2018b).

Openness to foreign direct investment can help to revert these trends. Research published by the OECD shows a positive correlation between the presence of foreign firms and the productivity of local Costa Rican firms in both the manufacturing and the services sectors (OECD, 2018c). Research has also found that public policy to boost linkages between foreign-owned and local firms helps knowledge diffusion (Alfaro-Urena et al., 2019). Nonetheless, Costa Rica remains a dual economy, with a modern sector in free trade zones and

traditional enterprises outside them. To boost aggregate productivity the government policy should therefore continue to stimulate the productivity of local firms.

Figure 2 – Low productivity explains the income gap with OECD countries



Note: Compared to the weighted average using population weights of the 18 OECD countries with highest GDP per capita in 2018 based on 2018 purchasing power parities (PPPs). The sum of the percentage difference in labour resource utilisation and labour productivity does not add up exactly to the GDP per capita difference since the decomposition is multiplicative.
Source: OECD National Accounts database; OECD Productivity database; and OECD Economic Outlook 107 database.

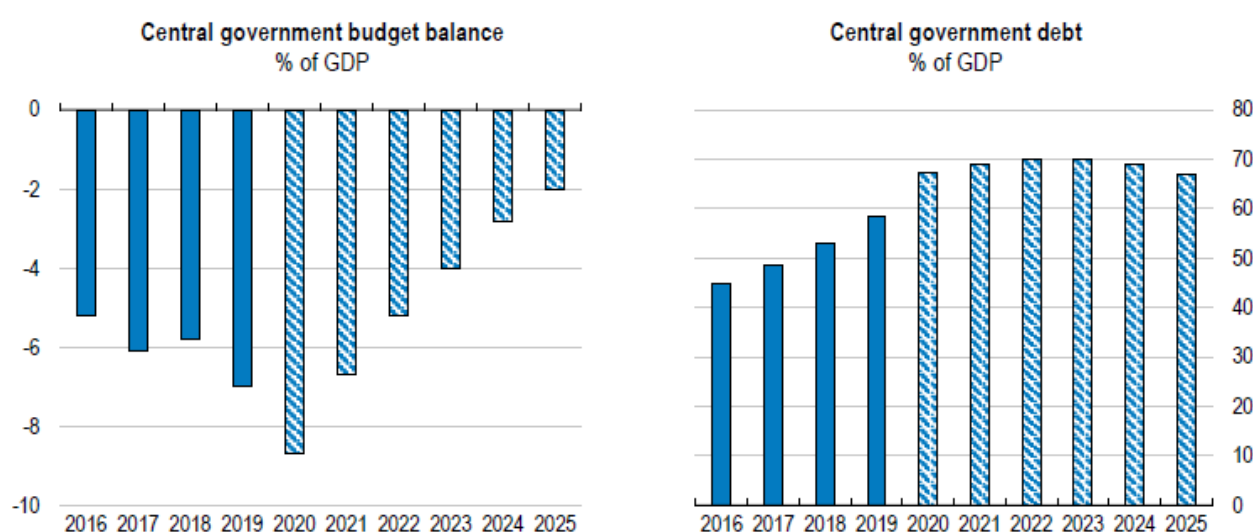
Recent reforms have sought to stimulate business dynamism by enhancing product-market competition and levelling the playing field between state-owned firms and the private sector. As a part of the OECD accession process, legislation adopted by Congress has strengthened the competition authorities and curtailed political interference in state-owned enterprises. Tentative estimates suggest that these two reforms, when fully implemented, could boost the level of GDP per capita by nearly 10% within 5 years – a very significant improvement (OECD, 2020). Closing existing gaps in transport infrastructure, particularly roads, would also have a large productivity pay-off (Pisu and Villabos, 2016).

A fiscal reform to address budgetary challenges

The COVID-19 crisis will increase budget deficits around the world. This along with large drops in nominal GDP will result in higher public debt ratios. Costa Rica is not an exception, with its budget deficit projected to reach 9% of GDP in 2020. This is a large deficit but is, to a large extent,

attributable to the deteriorated fiscal position inherited from the past (Figure 3), which has limited the government's capacity to respond to the COVID-19 shock. Before the pandemic struck, high public debt and low ratings from credit agencies put Costa Rica's borrowing costs above those of peer Latin American countries. With fast-rising interest payments and large borrowing requirements (projected to reach 15% of GDP in 2021), government policy will need to focus once again on reducing the budget deficit.

Figure 3 - Full implementation of the fiscal reform would restore fiscal sustainability



Note: Data for 2020 onward are forecast.

Source: Costa Rica Finance Ministry.

The ambitious fiscal reform approved by Congress in December 2018 will provide the necessary framework to bring down public debt. The approval of this reform, which had been in the works for nearly two decades, has been a major step toward restoring fiscal sustainability. The legislation introduced a VAT system, more progressive income tax rates, and a spending rule constraining government outlays when public debt reaches specific thresholds. If fully implemented, the reform is expected to yield cumulated savings of 3.9 % of GDP over 2019–23. Policy efforts will need also to rationalise the remuneration of public sector workers, which has been growing above private sector wages for a long time, contributing to a high level of income inequality (González-Pandiella and

Gabriel, 2017).

Costa Rica's journey towards OECD membership has already involved many important reforms, which have the potential to boost long-term economic growth and inclusiveness, and improve fiscal sustainability. But, achieving the OECD membership is not the end of the journey. As a member of the OECD, Costa Rica will be in a better position to design and implement better policies by exchanging views, policy lessons and best practices with other member countries. This can inform the national dialogue and political debates on policies to boost economic performance and share its benefits among all Costa Ricans. Other countries will also learn from Costa Rica's valuable experiences in areas such as attracting foreign direct investment, diversifying the exports basket, preserving natural resources or ecotourism, making it a really good journey for all.

REFERENCES

Alfaro-Urena, Alonso and Manelici, Isabela and Vasquez, Jose P. (2019), *The Effects of Joining Multinational Supply Chains: New Evidence from Firm-to-Firm Linkages*, <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3376129>.

González Pandiella, A. and M. Gabriel (2017), "Deconstructing income inequality in Costa Rica: An income source decomposition approach", *OECD Economics Department Working Papers*, No. 1377, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/77759015-en>.

OECD (2020), *OECD Economic Surveys: Costa Rica 2020*, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/2e0fea6c-en>.

OECD (2018a), *OECD Economic Surveys: Costa Rica 2018*, OECD Publishing, Paris, https://dx.doi.org/10.1787/eco_surveys-cri-2018-en.

OECD (2018b), "Setting the scene: An overview of Costa Rica's

productivity performance”, in *OECD Economic Survey of Costa Rica: Research Findings on Productivity*, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/9789264298774-2-en>.

OECD (2018c), “FDI spillovers in Costa Rica: boosting local productivity through backward linkages”, in *OECD Economic Survey of Costa Rica: Research Findings on Productivity*, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/9789264298774-3-en>.

OECD (2016), *OECD Economic Surveys: Costa Rica 2016: Economic Assessment*, OECD Publishing, Paris, https://dx.doi.org/10.1787/eco_surveys-cri-2016-en.

Pisu, M. and F. Villalobos (2016), “A bird-eye view of Costa Rica’s transport infrastructure”, *OECD Economics Department Working Papers*, No. 1323, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/5jlswbwvwqjf-en>.

Un viaje exitoso: las reformas económicas de Costa Rica, 2015-2020

Category: Costa Rica, COVID-19, Latin America, Posts in Spanish
written by oecdecoscope | June 8, 2022

Por Alberto González Pandiella, Patrick Lenain, Mauro Pisu y Enes Sunel

El 15 de mayo de 2020, Costa Rica fue invitada a unirse a la OCDE como su miembro número 38, lo que marca el final de un proceso de revisión exhaustiva por parte de la organización, incluidas tres estudios económicos de la OCDE (OCDE, 2016; OCDE, 2018a y OCDE, 2020). Este camino hacia la adhesión

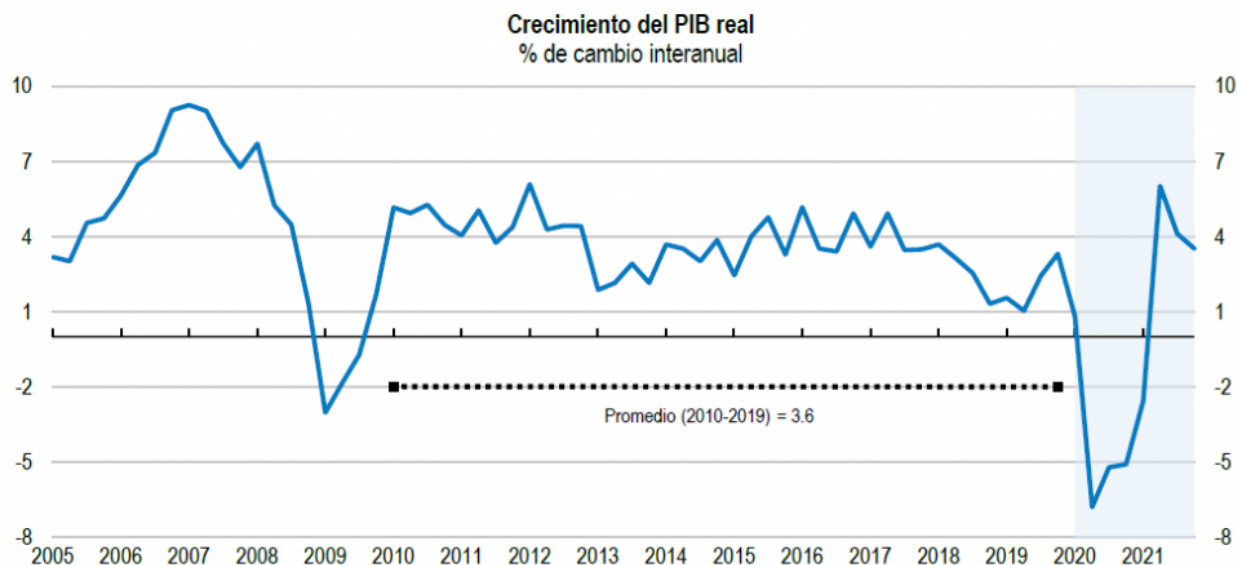
implicó iniciar múltiples reformas para impulsar el crecimiento económico y distribuir sus beneficios a todos los costarricenses. Gracias a las reformas en curso, Costa Rica está mejor preparada para enfrentar la crisis de COVID-19 e impulsar su crecimiento a largo plazo.

Crecimiento estable y resistente

Con un fuerte compromiso con la apertura comercial, Costa Rica ha atraído grandes flujos de inversión extranjera directa. Esto ha ayudado a progresar en la cadena de valor y mejorar la composición de sus exportaciones. El país también ha sido un imán para el turismo internacional. Esto ha sido gracias a su rico capital natural, especialmente su biodiversidad y la gran extensión de selva tropical, y a las políticas para protegerlo. Estos factores, junto con el aumento de los ingresos reales, han permitido un crecimiento constante y resistente, con rápidas recuperaciones a los shocks exógenos (Figura 1). El PIB real per cápita se ha triplicado en los últimos 30 años y alcanzó casi USD20,000 en 2019, cerca del promedio latinoamericano (OCDE, 2018a).

Sin embargo, el brote de COVID-19 ha infligido un duro golpe a la actividad económica, el empleo y el bienestar de los costarricenses. Se han puesto en marcha innovadoras medidas para proporcionar apoyo monetario y liquidez a los hogares y las empresas afectadas, ayudando a evitar daños a largo plazo. Sin embargo, el retorno a una situación normal está plagado de grandes incertidumbres y depende del desarrollo epidemiológico de la pandemia y la velocidad de la recuperación global.

Figura 1: a pesar de las conmociones externas, el crecimiento ha sido constante y resistente



Nota: Los datos para 2020 y 2021 reflejan el escenario de "impacto único" descrito en la Encuesta Económica de la OCDE de Costa Rica (2020).

Fuente: base de datos OECD Economic Outlook 107.

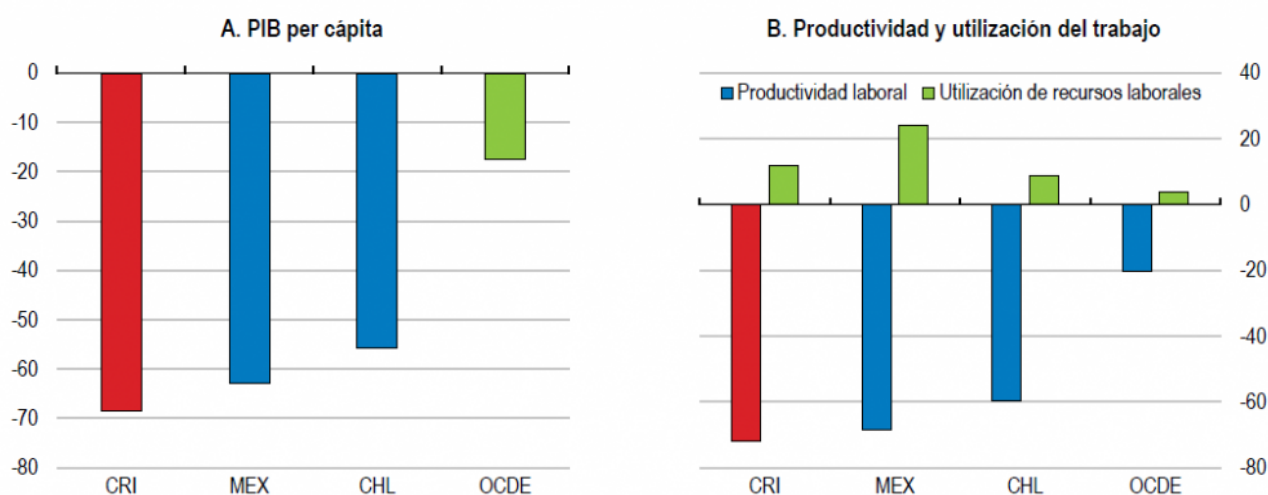
Las reformas recientes impulsarán la productividad de las empresas locales

Además del brote de coronavirus, Costa Rica enfrenta varios desafíos para continuar con su desempeño anterior. El proceso de convergencia de ingresos en las economías emergentes generalmente implica aumentar la productividad hacia la "frontera" que prevalece en las economías avanzadas. Sin embargo, en Costa Rica, el crecimiento de la productividad laboral ha quedado rezagado con respecto a sus pares durante muchos años. Los bajos niveles de productividad explican en gran medida la brecha de ingresos con los países de la OCDE (Figura 2). En 2016, el PIB por hora trabajada fue de solo USD 18.6 en comparación con un promedio de la OCDE de USD 51.9 (OCDE, 2018b).

La apertura a la inversión extranjera directa puede ayudar a revertir estas tendencias. La investigación publicada por la OCDE muestra una correlación positiva entre la presencia de empresas extranjeras y la productividad de las empresas costarricenses locales en los sectores manufacturero y de servicios (OCDE, 2018c). La investigación también ha encontrado que la política pública para impulsar los vínculos

entre las empresas locales y de propiedad extranjera ayuda a la difusión del conocimiento (Alfaro-Urena et al., 2019). No obstante, Costa Rica sigue siendo una economía dual, con un sector moderno en zonas de libre comercio y empresas tradicionales fuera de ellas. Para impulsar la productividad agregada, la política gubernamental debería continuar estimulando la productividad de las empresas locales.

Figura 2 - La baja productividad explica la brecha de ingresos con los países de la OCDE



Nota: En comparación con el promedio ponderado utilizando los pesos de la población de los 18 países de la OCDE con el PIB per cápita más alto en 2018 en función de las paridades de poder adquisitivo (PPAs) de 2018. La suma de la diferencia porcentual en la utilización de los recursos laborales y la productividad laboral no suma exactamente la diferencia del PIB per cápita, ya que la descomposición es multiplicativa.

Fuente: base de datos de cuentas nacionales de la OCDE; Base de datos de productividad de la OCDE; y la base de datos OECD Economic Outlook 107.

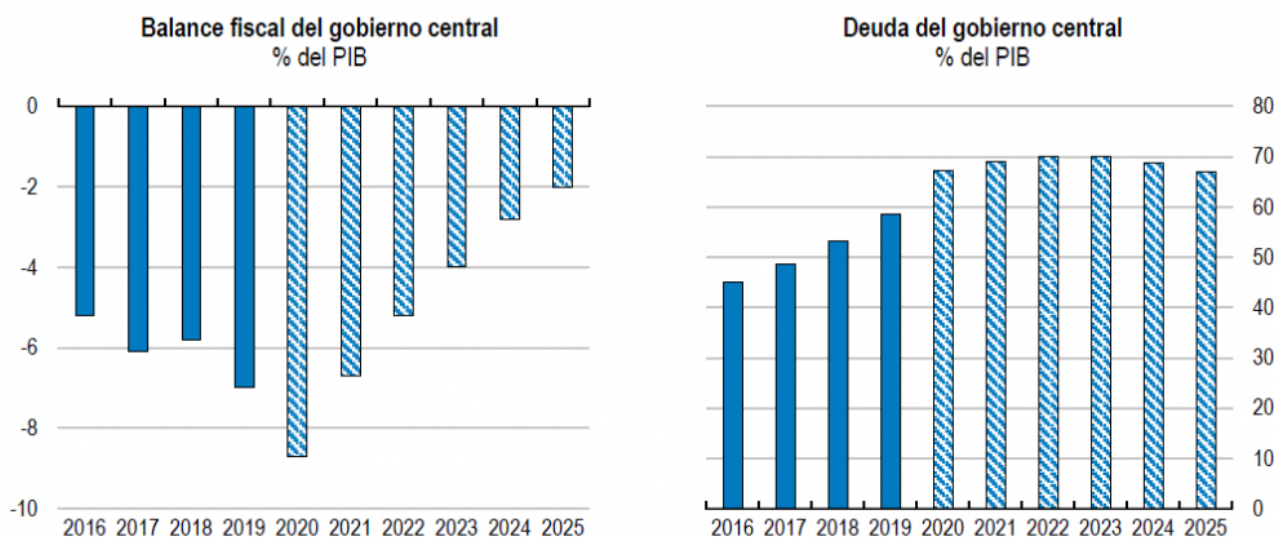
Las reformas recientes han tratado de estimular el dinamismo empresarial mejorando la competencia en el mercado de productos y nivelando el campo de juego entre las empresas estatales y el sector privado. Como parte del proceso de adhesión a la OCDE, la legislación adoptada por el Congreso ha fortalecido a las autoridades de competencia y reducido la interferencia política en las empresas estatales. Las estimaciones provisionales sugieren que estas dos reformas, cuando se implementen por completo, podrían aumentar el nivel del PIB per cápita en casi un 10% en 5 años, una mejora muy significativa (OCDE, 2020). Cerrar las brechas existentes en la infraestructura de transporte, en particular las carreteras, también tendría una gran efecto positivo (Pisu y

Villabos, 2016).

Una reforma fiscal para abordar los desafíos presupuestarios

La crisis de COVID-19 aumentará los déficits presupuestarios en todo el mundo. Esto, junto con grandes caídas en el PIB nominal, dará como resultado ratios de deuda pública más altos. Costa Rica no es una excepción, ya que se prevé que el déficit presupuestario alcance el 9% del PIB en 2020. Este es un gran déficit, pero es, en gran medida, atribuible al deterioro de la posición fiscal heredada del pasado (Figura 3), que ha limitado la capacidad del gobierno para responder al shock COVID-19. Antes de que se desatara la pandemia, la alta deuda pública y las bajas calificaciones de las agencias de crédito ya habían colocado los costos de endeudamiento de Costa Rica por encima de los de los países latinoamericanos pares. Con el rápido aumento de los pagos de intereses y las grandes necesidades de financiación (que se proyecta alcanzarán el 15% del PIB en 2021), la política gubernamental deberá centrarse una vez más en reducir el déficit presupuestario.

Figura 3 - La implementación completa de la reforma fiscal restablecería la sostenibilidad fiscal



Nota: Los datos de 2020-2025 son proyecciones.

Fuente: Ministerio de Hacienda de Costa Rica.

La ambiciosa reforma fiscal aprobada por el Congreso en diciembre de 2018 proporcionará el marco necesario para

reducir la deuda pública. La aprobación de esta reforma, que había estado en discusión durante casi dos décadas, ha sido un paso importante hacia la sostenibilidad fiscal. La legislación introdujo un sistema de IVA, tasas de impuesto sobre la renta más progresivas y una regla de gasto que limita el crecimiento del gasto del gobierno cuando la deuda pública alcanza umbrales específicos. Si se implementa completamente, se espera que la reforma produzca ahorros acumulados del 3.9% del PIB durante 2019–23. Es pertinente también realizar esfuerzos para racionalizar la remuneración de los trabajadores del sector público, que ha estado creciendo por encima de los salarios del sector privado durante mucho tiempo, contribuyendo a un alto nivel de desigualdad de ingresos (González Pandiella y Gabriel, 2017).

El viaje de Costa Rica hacia la membresía de la OCDE ya ha involucrado muchas reformas importantes, que tienen el potencial de impulsar el crecimiento económico y la inclusión a largo plazo, y mejorar la sostenibilidad fiscal. Pero lograr la membresía de la OCDE no es el final del viaje. Como miembro de la OCDE, Costa Rica estará en una mejor posición para diseñar e implementar mejores políticas mediante el intercambio de puntos de vista, experiencias y mejores prácticas con otros países miembros. Esto puede orientar el diálogo nacional y los debates políticos sobre políticas para impulsar el desempeño económico y compartir sus beneficios entre todos los costarricenses. Otros países también aprenderán de las valiosas experiencias de Costa Rica en áreas como atraer inversión extranjera directa, diversificar la canasta de exportaciones, preservar los recursos naturales o el ecoturismo, lo que hará de este viaje un buen viaje para todos.

Referencias

Alfaro-Urena, Alonso, Manelici, Isabela y Vasquez, Jose P. (2019), *The Effects of Joining Multinational Supply Chains: New Evidence from Firm-to-Firm Linkages*,

<http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3376129>.

González Pandiella, A. y M. Gabriel (2017), "Deconstructing income inequality in Costa Rica: An income source decomposition approach", *OECD Economics Department Working Papers*, No. 1377, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/77759015-en>.

OECD (2020), *OECD Economic Surveys: Costa Rica 2020*, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/2e0fea6c-en>.

OECD (2018a), *OECD Economic Surveys: Costa Rica 2018*, OECD Publishing, Paris, https://dx.doi.org/10.1787/eco_surveys-cri-2018-en.

OECD (2018b), "Setting the scene: An overview of Costa Rica's productivity performance", in *OECD Economic Survey of Costa Rica: Research Findings on Productivity*, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/9789264298774-2-en>.

OECD (2018c), "FDI spillovers in Costa Rica: boosting local productivity through backward linkages", in *OECD Economic Survey of Costa Rica: Research Findings on Productivity*, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/9789264298774-3-en>.

OECD (2016), *OECD Economic Surveys: Costa Rica 2016: Economic Assessment*, OECD Publishing, Paris, https://dx.doi.org/10.1787/eco_surveys-cri-2016-en.

Pisu, M. y F. Villalobos (2016), "A bird-eye view of Costa Rica's transport infrastructure", *OECD Economics Department Working Papers*, No. 1323, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/5jlswbwvwqjf-en>.

Reaching out to informal workers in Latin America: Lessons from COVID-19

Category: Argentina, Brazil, chile, Colombia, Costa Rica, COVID-19, Latin America, Mexico

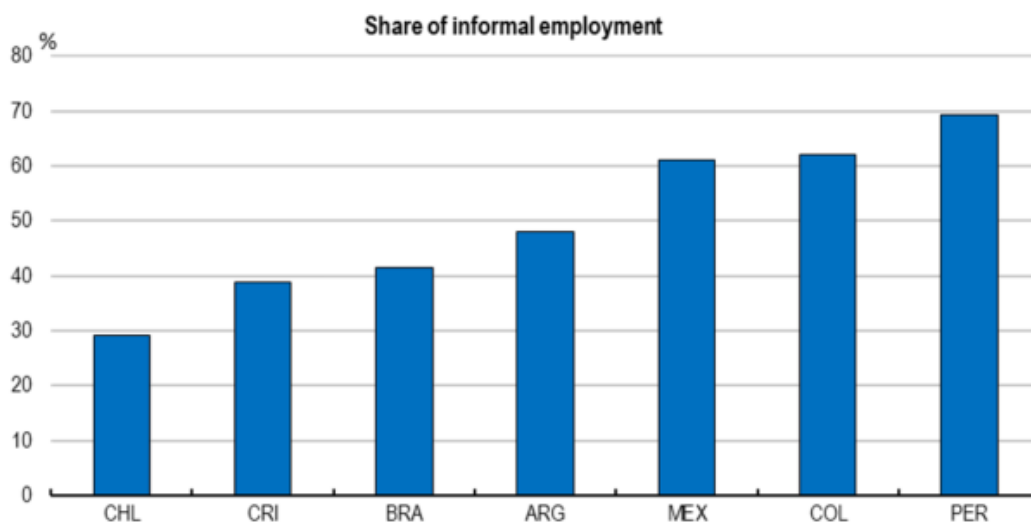
written by oecdecoscope | June 8, 2022

By Jens Arnold, Paula Garda, Alberto Gonzalez-Pandiella, OECD Economics Department

Social distancing has led to sharp declines in mobility and activity across Latin America. Widespread informality creates particular challenges for the livelihoods of many workers. As their activities are shut down to contain the spread of COVID-19, informal workers or small entrepreneurs are usually not covered by social protection. Largely out of reach of the public sector, they easily fall through the cracks of emergency income support measures. This has highlighted a major need to rethink and strengthen social protection mechanisms in Latin America. Providing more complete social safety nets that are not tied to formal employment and that can react rapidly to income losses would be one solution. In many countries in the region, such safety nets could be built on the basis of existing conditional cash transfer programmes.

Informal workers and small entrepreneurs account for a significant share of the workforce across Latin America (Figure 1). Most of them have no access to social protection, and almost no savings to carry them through the trough. Informal employees were the first to lose their jobs, while self-employed entrepreneurs such as street sellers and small service providers were left with no source of income as streets became empty. Working from home may be a solution for educated middle-class workers, but it is out of reach for the most vulnerable (Mongey and Weinberg, 2020).

Figure 1. Labour informality is widespread in Latin America



Note: Informal workers include own-account workers outside the formal sector, contributing family workers, employers and members of producers' cooperatives in the informal sector, and employees without formal contracts. Data refer to 2019 or latest available year.

Source: ILOstat, IBGE, OECD. Data refer to 2019 or latest available year.

The crisis has exposed shortcomings in existing social protection mechanisms

Governments in Latin America responded swiftly to the unprecedented challenges posed by COVID-19. Many countries designed temporary support measures, building on existing instruments such as formal-sector unemployment insurance and cash transfers. Formal-sector employees benefitted from more flexible access to unemployment benefits, for example in Brazil and Chile, while temporary short-time work schemes, wage subsidies or lower labour contributions helped to preserve formal labour contracts Brazil, Colombia, Costa Rica and several Mexican states. Cash transfer schemes targeted to low-income households play important roles in Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Mexico and Uruguay, among others. These cash transfer schemes are typically based on large locally-maintained registries of low-income households that can consider both formal and informal incomes. Providing additional resources to these schemes allowed to raise benefit levels and/or expand coverage, including by eliminating previous enrolment waiting lists, as in the cases of Brazil, Chile, Colombia and Peru.

The COVID-19 policy response, however, has also exposed significant gaps in existing social safety networks. Amid policy support for formal workers and for the poor, vulnerable households whose livelihoods depend on informal activities are often left without any social protection mechanism to fall on. Before the pandemic, many of these had successfully escaped poverty and gained incomes above the threshold where they would qualify for cash transfers, but without gaining access to the kind of social protection in place for formal employees. As distancing measures led to unprecedented declines in demand, many of these households were left without any income.

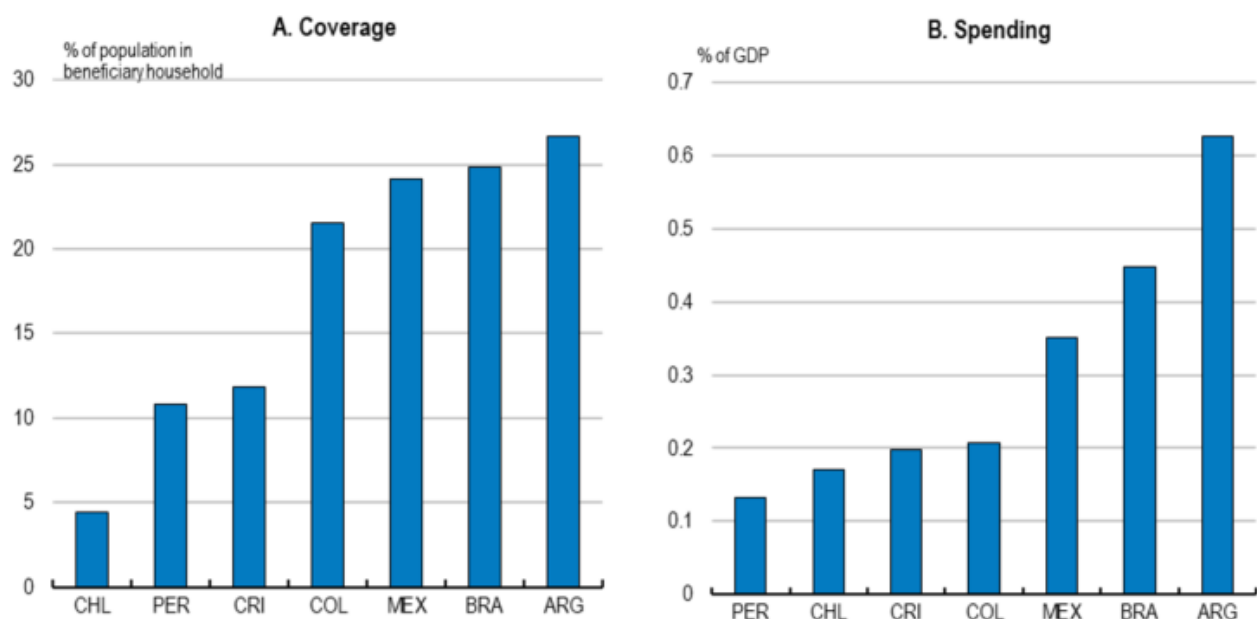
Reaching informal workers is a challenge for public policies and has required innovative ideas. Beyond the grasp of income tax systems, and with no access to social benefits, many informal workers have traditionally been outside the radar of the state. In addition, they often lack access to banking services, so governments had to respond creatively and ensure the creation of basic bank accounts for emergency benefit recipients. More than 50 million Brazilians used a smartphone application to receive an emergency benefit established after the outbreak. Colombia has been similarly successful, paying out benefits to 1.5 million households previously not covered by social benefits, and including free digital banking products. Chile is supporting more than 2 million vulnerable and informal households through different cash transfers, handing out debit cards to those without a bank account. Costa Rica's new cash transfer also offers the creation of a bank account. Such programmes have replaced significant shares of pre-crisis incomes for low-income households (Busso et al., 2020).

Lessons for the future

Building more effective universal social safety nets that include informal workers and entrepreneurs emerges as one of

the main lessons from the COVID-19 crisis and the social unrest during 2019. Given their wide reach in many countries, existing cash-transfer programmes would be the most straightforward basis for effective social safety nets (Figure 2, Panel A). In several countries, eligibility is in principle universal, but in practice, enrolment processes are too slow or cumbersome to help people in the face of sudden income losses. An important step would therefore be to make cash transfer programmes more agile, so that they can disburse quickly when people lose their livelihoods, following the examples of the UK's Universal Credit or Malaysia's BSH programme. More universal social safety nets based on means-tested cash transfers could also help to reduce the widespread fragmentation of social programmes, and strengthen their effectiveness.

Figure 2. Conditional cash transfer programmes achieve significant coverage at low fiscal costs



Note: Data refer to 2017 for Colombia and 2018 for all remaining countries. Source: OECD calculations based on ECLAC: Database of non-contributory social protection programmes in Latin America and the Caribbean, available at <http://dds.cepal.org/bdptc/>.

Financing universal social safety nets will require additional resources, but building on existing programmes may make the cost manageable. Cash transfer schemes are among the most cost-efficient social expenditure programmes, and they cost relatively little (Figure 2, Panel B). Brazil's successful Bolsa Família programme, for example, currently only costs

0.5% of GDP, compared with 12% spent on formal social security schemes. During the COVID-19 pandemic, additional spending of 0.04% of GDP was enough to eliminate an accumulated queue of 1 million benefit applicants. Building on existing citizen identification systems and digital technologies could further reduce costs.

Social protection for informal workers should go along with efforts to foster formalisation. Reviewing non-wage labour costs can help to reduce informality, as illustrated by Colombia's 2012 tax reform. Costly and complex business regulations, including those for starting a formal business, also hamper the formalisation of firms and jobs. Expanding the use of one-stop shops for business regulations would be one way forward. Social programmes could increasingly integrate training and lifelong learning for informal workers. This could create a virtuous circle between formal employment, growth and equity.

América Latina se enfrenta a una recesión como ninguna otra

Category: Economic outlook, Latin America, Posts in Spanish
written by oecdoscope | June 8, 2022

by Jens Arnold, Paula Garda, Alberto Gonzalez-Pandiella, Robert Grundke, Nicolas Ruiz, Enes Sunel, Departamento de Economía, OCDE

La propagación del Covid-19 ha sacudido la vida de las personas en todo el mundo de manera extraordinaria, amenazando la salud, interrumpiendo la actividad económica, afectando el

bienestar y los empleos. El confinamiento y otras medidas de distanciamiento social para retrasar la propagación de COVID-19 han llevado grandes partes de las economías a una detención. Los pronósticos de pérdidas de producto y empleo se han disparado a medida que los gobiernos se enfrentan a una crisis que no tiene precedentes. Reflejando el inusual grado de incertidumbre, en estas Perspectivas Económicas de la OCDE se presentan dos escenarios: un escenario en el que se produce un segundo brote hacia finales de este año, y un escenario alternativo en el que se evita el segundo brote. En el escenario con segundo brote, se prevé que el PIB mundial disminuya en un -7.6% en 2020 con un débil crecimiento de 2.7% en 2021; en el escenario en el que el segundo brote es evitado, el crecimiento será del -6% en 2020 y del 5.2% en 2021. En muchas economías avanzadas, los ingresos reales per cápita podrían perder el equivalente a de cinco a ocho años de crecimiento.

La rápida expansión del Covid-19 ha empujado a América Latina a convertirse recientemente en el epicentro de la pandemia, a la vez que entra en la recesión más profunda de la historia reciente. Como ninguna otra recesión, ésta se ve agravada por shocks simultáneos de salud, económicos, de precios de las materias primas y sociales, al unísono en toda la región. La región se enfrenta a desafíos propios que agravan el panorama: un espacio fiscal limitado, sistemas de salud y seguridad social menos desarrollados, grandes salidas de capital, una caída en picada de las remesas, una gran proporción de trabajadores informales sin ningún tipo de protección social y un gran descontento social. Adicionalmente, la economía global y el turismo se encuentran en cuidados intensivos, y su recuperación será muy lenta, excluyéndolos de ser un salvavidas, como ha sucedido en otras recesiones.

Una recesión sin precedentes: se prevé que el crecimiento de las seis economías más grandes de la región, que abarcan alrededor del 85% del PIB de América Latina, se reduzca 8.8%

(Cuadro) en caso de que se produzca un segundo brote del virus durante 2020. En caso de que se evite este segundo brote, se espera que la actividad económica disminuya en un 7.3%. En ambos casos, la recuperación en el 2021 será lenta y gradual, y el PIB en 2021 seguirá por debajo de los niveles pre-pandémicos (Figura, panel A). Los niveles de desempleo alcanzarán niveles históricos. En caso de que se produzca un segundo brote los niveles de desempleo permanecerían altos durante más tiempo (Figura, panel B).

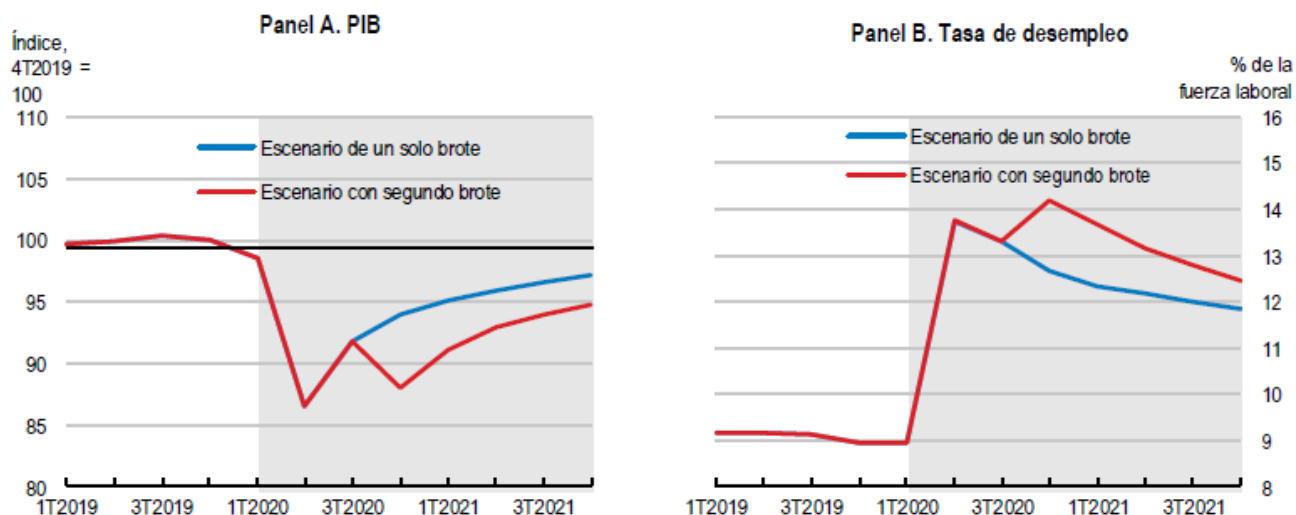
Los gobiernos y las autoridades monetarias de la región reaccionaron con notable rapidez a la crisis con políticas audaces e innovadoras. Y su intervención seguirá siendo necesaria. Los países de la región deberían seguir prestando apoyo a los sistemas de salud, reforzando programas de testeo, rastreo, localización y aislamiento para evitar futuros brotes. También deberían continuar dando apoyo a los tantos trabajadores informales y las empresas más vulnerables.

Tabla. Perspectivas Económicas de la OCDE para algunos países de América Latina

PIB, var. anual % Precios constantes		Escenario de un solo brote		Escenario con segundo brote	
		2020	2021	2020	2021
	2019				
Argentina	-2.2	-8.3	4.1	-10.1	1.7
Brasil	1.1	-7.4	4.2	-9.1	2.4
Chile	1.0	-5.6	3.4	-7.1	1.9
Colombia	3.3	-6.1	4.3	-7.9	2.8
Costa Rica	2.1	-4.1	2.7	-4.9	1.5
México	-0.1	-7.5	3.0	-8.6	2.0
Media Ponderada	0.5	-7.3	3.7	-8.8	2.1

Fuente: Perspectivas Económicas 107 de la OCDE.

Gráfico. Una larga recesión con históricas pérdidas de empleo



Nota: Los datos refieren al promedio ponderado de seis países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica y México. El promedio de la tasa de desempleo excluye Argentina.

Fuente: Perspectivas Económicas 107 de la OCDE

La recesión puede dejar múltiples cicatrices, profundizando las ya altas desigualdades en la región. Muchos de los sectores de servicios más afectados por la pandemia son relativamente intensivos en empleo, con una gran proporción de trabajadores informales y de bajos ingresos y en ocupaciones en las que el teletrabajo no es una opción. Los cierres forzosos, la reapertura a niveles de capacidad más bajos y los cambios en las preferencias de los consumidores pueden hacer que muchas empresas dejen de ser viables, que las pérdidas de puestos de trabajo duren más tiempo y que muchas empresas se enfrenten a un mayor riesgo de impago. Es posible que muchos empleos formales no vuelvan a aparecer rápidamente, y que muchos trabajadores no tengan otra oportunidad que la de convertirse en informales, con cicatrices duraderas en los salarios y la productividad. Otro riesgo latente es la aparición de problemas masivos de liquidez y solvencia entre las empresas, que podrían dar lugar a un deterioro de la cartera de crédito, afectando así a la oferta de crédito y dando lugar a vulnerabilidades financieras, retrasando la recuperación, especialmente en los países con una deuda corporativa ya elevada.

El alto endeudamiento público es una de las principales

vulnerabilidades en la región. Muchos países ya tienen un espacio fiscal acotado, con déficits fiscales y deuda pública elevados. Esta situación se agravará por el mayor gasto destinado a la pandemia, la caída de los ingresos debido a la recesión y, en algunos países, a la drástica reducción de los precios de las materias primas. Es probable que muchos países tengan que enfrentar condiciones financieras más difíciles en el futuro, sobre todo si la creciente preferencia de los mercados financieros por activos más seguros se consolida. Las líneas de financiación específicas puestas en marcha por organismos multilaterales están ayudando actualmente en varios países a afrontar los mayores gastos asociados a la pandemia, y serán también fundamentales durante la recuperación, en particular para aquellos países con más dificultades para obtener financiación en los mercados de capital.

La crisis refuerza la necesidad de gastar mejor. Medidas para aumentar la eficiencia del gasto, incluida la reducción de las numerosas exenciones fiscales y los regímenes tributarios especiales, permitirían encontrar cierto espacio fiscal. Orientar las transferencias hacia los trabajadores vulnerables desempleados e informales limitaría los efectos adversos en los hogares y la demanda agregada. Paquetes fiscales temporales bien focalizados, junto con anuncios creíbles de medidas para colocar la deuda en una trayectoria sostenible a largo plazo, ayudarán a las economías a evitar el deterioro de las condiciones financieras, especialmente cuando los mercados se vuelvan más exigentes. Las medidas post-pandemia para preservar la sustentabilidad fiscal deberán llevarse a cabo cuidadosamente y con un *timing* correcto para que sean coherentes con los objetivos de crecimiento e inclusión.

Perspectivas económicas en países individuales de la región:

Argentina: Cuando la pandemia de COVID-19 azotó Argentina, la economía ya se encontraba en recesión y la incertidumbre era elevada, sobre todo en lo que respecta a la reestructuración de la deuda pública elevada. Si bien la adopción de medidas

oportunas de contención mitigó la propagación del virus, también redujo la capacidad de producción y la demanda interna. Con el levantamiento gradual del confinamiento, la demanda interna se recuperará, pero seguirá siendo débil debido al aumento del desempleo y a la disminución de los ingresos en los hogares. Las perspectivas para un repunte significativo de la inversión dependerán de que se acometa con éxito una reestructuración de la deuda pública. Se prevé una caída del PIB del 10% en 2020 en el escenario con un segundo brote del virus a finales de este año. Si se evita un segundo brote, se eludirá una nueva caída de la actividad económica y será posible una recuperación más rápida. En este escenario, se prevé una caída del PIB del orden de 8% en 2020.

Brasil: La economía se estaba recuperando de una larga recesión cuando se produjo el brote de COVID-19, y ahora se prevé que el país padezca una recesión mucho más profunda que en 2015/16. Los gobiernos estatales y municipales impusieron medidas de confinamiento, con un cumplimiento considerable de la población a pesar de las dificultades derivadas de la precariedad de las viviendas, la pobreza y el elevado nivel de empleo informal. Estas medidas provocaron que se detuviera la actividad hasta un 20% y ocasionarán una fuerte contracción del producto en 2020. Se prevé que el PIB caiga en un 9,1% en 2020 en el escenario que supone un segundo brote de la pandemia en el último trimestre de 2020. En el escenario de un solo brote de la pandemia, la caída sería del 7,4%. A medida que se suavizan las medidas de confinamiento y se reanuda la actividad, se estima que la economía se recupere lenta y parcialmente, si bien algunos empleos y empresas no sobrevivirán. El desempleo alcanzará máximos históricos antes de retroceder gradualmente.

Chile: Tras las protestas sociales de finales de 2019, que afectaron al crecimiento, el brote de COVID-19 y la caída de los precios de las materias primas empujarán a la economía a la recesión más profunda desde 1982. Si se produce un segundo

brote más adelante durante el año, el PIB disminuirá un 7% y no comenzará a repuntar hasta 2021. En caso de que la pandemia actual remita, comenzará una recuperación impulsada por el consumo durante el tercer trimestre, si bien el PIB disminuirá un 5,6% en 2020. El comercio seguirá en niveles muy bajos por la lenta recuperación mundial.

Colombia: La economía está entrando en una profunda recesión, la peor en un siglo, impulsada por las medidas de confinamiento necesarias para limitar la propagación del COVID-19, la contracción económica mundial, la caída de los precios del petróleo y el endurecimiento de las condiciones financieras. En caso de que produjera un segundo brote de COVID-19 a finales de 2020, el PIB disminuiría un 7,9% en 2020 y la recuperación gradual se retrasaría hasta 2021. Si la pandemia quedara controlada tras el brote actual, se espera que el PIB disminuya un 6,1% en 2020. La recuperación será moderada, liderada por mejoras en la confianza de los consumidores y una recuperación gradual de la inversión, tras la reducción de la carga impositiva sobre las empresas introducida en la reforma fiscal de 2019. La debilidad del entorno exterior mantendrá el comercio en niveles muy bajos y aumentará la vulnerabilidad de los precios de las materias primas, ya de por sí bajos.

Costa Rica: En caso de que se produzca un nuevo brote de coronavirus en otoño este año, se prevé que la actividad económica se contraiga en cerca de 5% en 2020, antes de repuntar en torno a un $1\frac{1}{2}\%$ en 2021. La prolongada recuperación dependerá del retraso en la normalización del turismo, dado que los sectores afectados podrían estar prácticamente paralizados hasta el último trimestre de 2020. Si la pandemia remitiera pronto, el PIB se contraería alrededor del 4% en 2020 y se expandiría en torno al $2\frac{3}{4}\%$ en 2021, gracias a una mejor recuperación de la demanda doméstica y de las exportaciones. La inflación general disminuirá inicialmente más que la inflación subyacente por la debilidad de los

precios de la energía. El aumento del desempleo debilitará al consumo privado.

México: La pandemia empujará a la economía a una grave recesión en 2020, impulsada por la contracción mundial, la caída del turismo, el descenso de los precios del petróleo y las necesarias medidas de confinamiento adoptadas. La economía caería un 8,6% este año según el escenario de doble impacto. Si remitiera el virus tras el primer brote, la economía se contraería más de un 7%, y en la segunda mitad del año veríamos una recuperación motivada por las exportaciones y el consumo. En ambos escenarios, el nivel del PIB seguiría siendo inferior al de finales de 2019, ya que los sectores del turismo y las exportaciones tardarán algún tiempo en volver a los niveles anteriores a la pandemia. La población más desfavorecida y vulnerable, incluidos los trabajadores del sector informal, se verán especialmente afectados por la recesión.

Para leer en más detalle sobre las proyecciones macroeconómicas, así como los principales desafíos estructurales ir al reporte en la o la versión español y portugués o versión inglés (que incluye proyecciones para todos los países de la OECD y principales desafíos).

Más info en <http://oecd.org/perspectivas-economicas/>

Después del confinamiento, caminando sobre la cuerda

floja hacia la recuperación

Category: Economic outlook, Latin America, Posts in Spanish

written by oecdecoscope | June 8, 2022

by Laurence Boone, Economista Jefe de la OCDE

La propagación de Covid-19 ha sacudido la vida de las personas en el mundo entero de una manera extraordinaria, amenazando la salud, interrumpiendo la actividad económica y perjudicando el bienestar y el empleo. Desde nuestra última actualización de las Perspectivas Económicas a principios de marzo, el coronavirus se ha convertido en una pandemia global, avanzando demasiado rápido para la capacidad de reacción de muchos sistemas de salud, que muchas veces no lograron hacer frente de manera efectiva. Para frenar la propagación del virus y ganar tiempo para fortalecer los sistemas de salud, los gobiernos tuvieron que cerrar grandes partes de la actividad económica. Al momento de escribir esto, la pandemia ha comenzado a retroceder en muchos países y la actividad ha comenzado a repuntar. El impacto sanitario, social y económico del brote podría haber sido considerablemente peor sin la dedicación del personal médico y de otros trabajadores esenciales que continuaron sirviendo al público, poniendo en riesgo su propia salud al hacerlo.

Los gobiernos y los bancos centrales han implementado políticas de amplio alcance para proteger a las personas y las empresas de las consecuencias de la interrupción repentina de la actividad. La actividad económica se ha derrumbado en todos los países de la OCDE durante el confinamiento, hasta en un 20% a 30% en algunos países. Esto es un shock extraordinario. Las fronteras se han cerrado y el comercio se ha desplomado. Simultáneamente, los gobiernos implementaron medidas de apoyo rápidas, importantes e innovadoras para amortiguar el impacto, subsidiando a trabajadores y empresas. Las redes de seguridad social y financiera se fortalecieron a una velocidad inédita. A medida que aumentaban las tensiones financieras, los bancos

centrales tomaron medidas fuertes y oportunas, desplegando una serie de políticas convencionales y no convencionales más allá de las utilizadas en la crisis financiera global, evitando que la crisis de salud y económica se convirtiera además en una crisis financiera.

Mientras no haya una vacuna o tratamiento disponible de manera generalizada, los responsables de formular políticas en todo el mundo seguirán caminando por la cuerda floja. El distanciamiento físico y la estrategia de testear, localizar, seguir y aislar (TTTI por sus siglas en inglés) serán los principales instrumentos para combatir la propagación del virus. TTTI es indispensable para que las actividades económicas y sociales puedan reanudarse. Pero aquellos sectores afectados por el cierre de fronteras y aquellos que requieren un contacto personal cercano, como el turismo, los viajes, el entretenimiento, los restaurantes y el alojamiento, no se reanudarán como antes. TTTI puede incluso no ser suficiente para prevenir un segundo brote del virus.

Ante esta incertidumbre extraordinaria, esta edición de las Perspectivas Económicas presenta dos escenarios posibles: uno en el que el virus continúa retrocediendo y permanece bajo control, y otro en el que un segundo brote aparece más adelante en 2020. Estos escenarios no son para nada exhaustivos, pero ayudan a enmarcar el campo de posibilidades y definir las políticas para caminar por esos terrenos inexplorados. Ambos escenarios son sombríos, ya que la actividad económica no vuelve ni puede volver a la normalidad en estas circunstancias. A finales del 2021, la pérdida de ingresos supera la de cualquier recesión anterior en los últimos 100 años fuera de tiempos de guerra, con consecuencias nefastas y duraderas para las personas, las empresas y los gobiernos.

La pandemia ha acelerado el giro desde la “gran integración” a la “gran fragmentación”. Han surgido restricciones comerciales y de inversión adicionales. Muchas fronteras están cerradas y

probablemente lo seguirán estando, al menos en parte, mientras continúen considerables brotes de virus. Las economías toman caminos diferentes, dependiendo de cuándo y en qué medida fueron afectadas por el virus, la preparación de su sistema de salud, su especialización sectorial y su capacidad fiscal para enfrentar el impacto. Las economías de los mercados emergentes también se han visto sacudidas por la crisis. Los precios de las materias primas se han desplomado. Importantes salidas de capital, la caída de las remesas, la vulnerabilidad de los sistemas de salud y la extensa informalidad laboral han amenazado su capacidad de recuperación sanitaria, económica y social. En todas partes, el confinamiento también ha exacerbado la desigualdad entre los trabajadores, ya que aquellos que pueden teletrabajar son en general altamente calificados, mientras que los menos calificados y los jóvenes están más expuestos, a menudo incapaces de trabajar o son despedidos. Esta situación se ve agravada por desigualdades en la cobertura de la protección social. Algunos países tienen los niveles de deuda privada incómodamente altos, y los riesgos de quiebras e insolvencias son importantes.

Se requerirán políticas extraordinarias para caminar por la cuerda floja hacia la recuperación. Incluso si el crecimiento aumenta en algunos sectores, la actividad en general permanecerá débil por un tiempo. Los gobiernos pueden proporcionar redes de protección que permitan a las personas y las empresas adaptarse, pero no pueden sostener la actividad, el empleo y los salarios del sector privado durante un período prolongado. Al menos parte del capital y los trabajadores de sectores y empresas con pocas perspectivas de recuperación tendrán que trasladarse hacia otros sectores que se expanden. Este tipo de transiciones son difíciles y rara vez suceden lo suficientemente rápido como para evitar que aumente el número de empresas en quiebra y un período sostenido de desempleo. Los gobiernos necesitarán adaptar el apoyo y acompañar la transición, permitiendo procesos de reestructuración rápidos para las empresas, sin estigma para los empresarios,

proporcionando ingresos para los trabajadores entre empleos, capacitación para los que fueron despedidos o se encuentran en transición hacia nuevos empleos, y protección social para los más vulnerables. Anteriormente, hemos reclamado un aumento de la inversión pública en tecnologías digitales y verdes para promover el crecimiento sostenible a largo plazo y elevar la demanda a corto plazo. Esto es aún más urgente hoy, ya que las economías se han visto muy afectadas.

Las políticas de recuperación de hoy darán forma a las perspectivas económicas y sociales en la próxima década. Las políticas monetarias ultra acomodaticias y una mayor deuda pública son necesarias y serán aceptadas mientras la actividad económica y la inflación estén deprimidas, y el desempleo esté alto. Sin embargo, el gasto financiado con deuda debe estar bien focalizado para apoyar a los más vulnerables y la inversión necesaria para una transición hacia una economía más sólida. El apoyo público debe ser transparente y justo. El apoyo a las empresas debe seguir reglas transparentes, y hacer que los accionistas y bonistas privados asumen pérdidas cuando los gobiernos intervengan, para evitar recompensas de riesgo privadas excesivas. El apoyo público continuo para los trabajadores y las empresas debe ser acompañado por mejoras en las relaciones entre empleadores y empleados, allanando el camino para una cohesión social más fuerte y, en última instancia, una recuperación más robusta y sostenible.

La recuperación no ganará fuerza sin más confianza, y la confianza no se recuperará completamente sin cooperación global. Es necesario aumentar la confianza tanto a nivel nacional como internacional. Las tasas de ahorro de los hogares se han disparado en la mayoría de los países de la OCDE, y la incertidumbre elevada y el aumento del desempleo frenan el consumo. Las interrupciones del comercio y las resultantes amenazas para las cadenas de suministro también impiden la reducción necesaria de la incertidumbre para que se reanude la inversión. La clave para reducir las dudas y

desbloquear el impulso económico reside en una cooperación mundial para combatir el virus con un tratamiento y una vacuna, en el marco de una reanudación más amplia del diálogo multilateral. La comunidad internacional debe garantizar que, cuando una vacuna o tratamiento esté disponible, se pueda distribuir rápidamente en el mundo entero. De lo contrario, la amenaza se mantendrá. Del mismo modo, reanudar un diálogo constructivo sobre el comercio elevaría la confianza empresarial y el apetito por la inversión.

Los gobiernos deben aprovechar esta oportunidad para diseñar una economía más justa y más sostenible, haciendo que la competencia y la regulación sean más inteligentes, modernizando los impuestos, el gasto público y la protección social. La prosperidad proviene del diálogo y la cooperación. Esto es cierto a nivel nacional y global.

Policy responses to COVID-19 in Latin America: Big steps in a small space

Category: COVID-19, Latin America

written by oecdecoscope | June 8, 2022

by Jens Arnold, Paula Garda, Alberto Gonzalez-Pandiella, Robert Grundke, Nicolas Ruiz and Enes Sunel

Latin American economies are facing important challenges in the face of the COVID-19 pandemic. The outbreak will exacerbate the region's deep inequalities along many dimensions, which calls for a strong policy reaction to protect vulnerable households and firms. Still, the need for big steps contrasts with the severely limited fiscal space

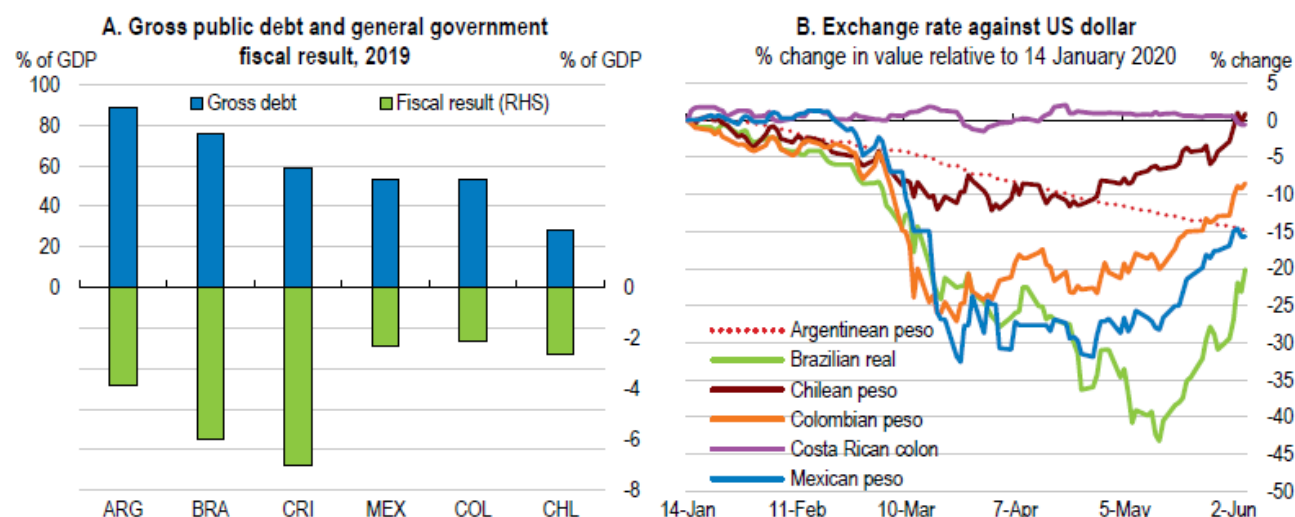
that most economies in the region have. Squaring this circle is not trivial, but well-designed temporary policies can go a long way to save livelihoods and prevent permanent scars, especially for disadvantaged groups.

Fighting poverty and inequality is now more important than ever before. The epidemic risks inflicting greater health risks and greater economic costs on the economically disadvantaged. Distancing measures will imply income losses for those whose jobs do not allow teleworking, and these workers are on average less-educated, with limited access to health insurance, in unstable and low-wage jobs. Often without formal employment, many workers are not covered by social safety nets. Women may also bear a particularly high burden as additional childcare duties resulting from school closures may disproportionately fall on them. School closures have suspended meal provision to children, risking malnutrition with long-lasting adverse effects for some, and an increase in inequalities, as disadvantaged households have lower access to digital learning possibilities. Many low-income households will also be particularly hit by the fall in remittances, which can reach 20%, as economic activity shuts down in host countries . Even before the pandemic, the region has seen significant episodes of social unrest, with large-scale uprisings and demonstrations taking place in Chile and Colombia.

Fiscal space available for the policy response is severely limited across the region. Only few countries have been able to build up fiscal buffers, for example Chile. More commonly, countries in the region face challenges related to high public debt, including Argentina, Brazil and Costa Rica (Figure 1, Panel A). Rising sovereign spreads and exchange rate depreciations have reflected the volatility of investor confidence and in some cases raised the cost of servicing foreign-currency debt (Figure 1, Panel B). Countries in the region are potentially vulnerable to sudden stops in light of

external debt and current account deficits, including those that have enjoyed easy access to external financing in the past.

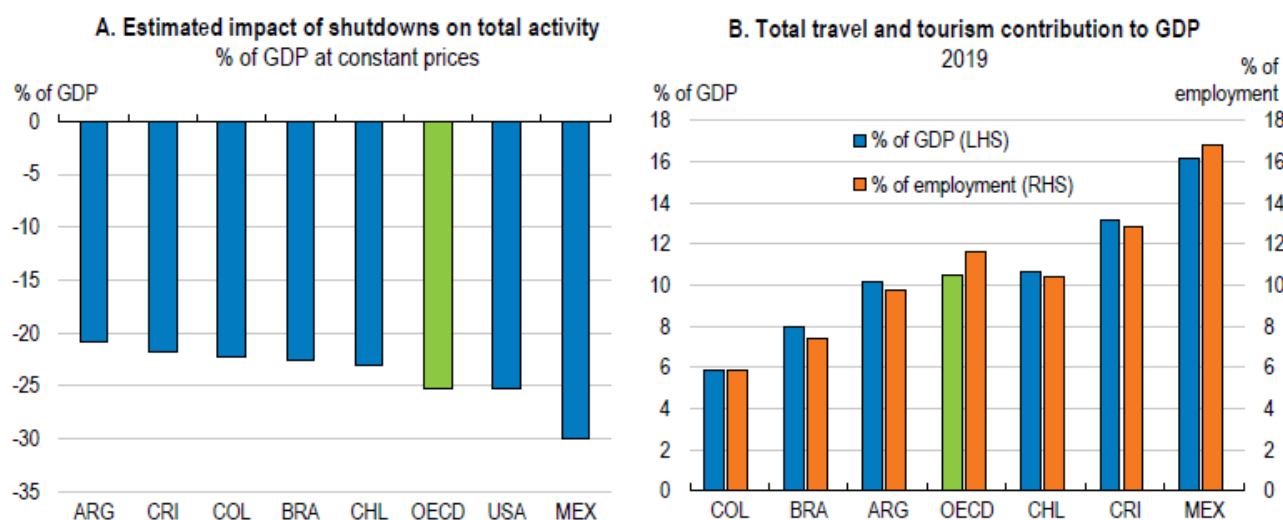
Figure 1. Fiscal space is limited in major Latin American economies and currencies have lost value



Source: IMF; National Treasury of Brazil; Thomson Reuters.

Economic challenges associated with COVID-19 are enormous. Domestic activity has been hit hard by the necessary confinement measures imposed in almost all Latin American countries (Figure 2, Panel A). Relatively more open economies, like Mexico, Chile and Costa Rica, also suffer from deep recessions in their trading partners. The tourism sector, crucial for Mexico, Costa Rica and Chile, is facing a contraction with effects that are likely to persevere (Figure 2, Panel B). Remittance inflows, exceeding 2 and 3% of GDP in Colombia and Mexico, respectively, are expected to fall significantly. The sharp decline in the oil price has eroded fiscal revenues in Colombia and Mexico.

Figure 2. A deep recession is on the horizon



Note: In Panels A and B, OECD refers to the unweighted average of its 37 member countries. In Panel B, data are estimates.

Source: OECD policy note on initial impact of COVID-19 containment measures on economic activity; World Travel & Tourism Council.

Policy support is crucial to save livelihoods

Despite all these challenges, policies can provide significant relief for disadvantaged groups. Emergency relief need not be at odds with efforts to improve fiscal sustainability, provided that the fiscal responses to COVID-19 are temporary, just like the pandemic itself. Temporary income support payments or short-time work compensation schemes can go a long way to keep families from falling into poverty or mitigate possible permanent effects on jobs. By contrast, expenditure items that are typically hard to reverse, such as new public hiring or subsidies without explicit sunset clauses should be avoided.

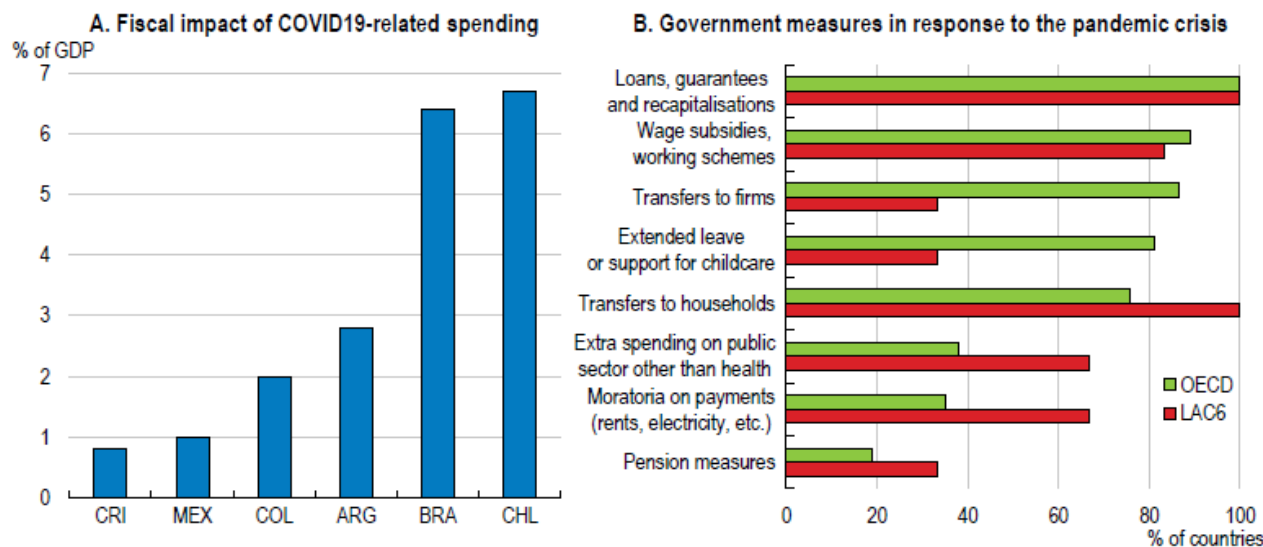
Governments in Latin America have acted appropriately to alleviate the economic effects of the pandemic. Pandemic-related additional public spending ranges from around 1% of GDP to around 7% of GDP (Figure 3, Panel A). This is in addition to tax deferrals or anticipated benefit disbursements, most of which will not be visible in fiscal accounts. Spending measures have focused on strengthening health systems, but also include income support for formal and informal workers and support for SMEs, including for wage bills and loan instalments, and public credit guarantees

(Figure 3, Panel B). In the short term, public deficits and debt will rise across Latin America.

Fiscal and monetary frameworks have been strengthened over time and now is the moment to put them to work. Fiscal rules should remain the main instrument to maintain sustainable debt paths over the medium-term, even if escape clauses may be used in the short-term. Beyond that, combining higher spending now with effective policy signals to bolster the credibility of fiscal adjustment in the future may be a good way to avoid a deterioration of financial conditions, especially as markets may become more demanding. Some countries have developed a culture of continuous policy evaluation, which should be rigorously applied to COVID-19 policy responses.

Identifying fiscal space is challenging but possible. Almost all countries in the region have room to focus spending more on those in need and to phase out tax loopholes that benefit more affluent taxpayers. Identifying this fiscal room may be more important now than ever, but often requires strong political leadership. Possible examples could include systematic evaluations of subsidies, tax exemptions, special tax regimes, public employment or the targeting of social transfers.

Figure 3. Policy responses and fiscal space differ widely across Latin America



Note: LAC6 refers to the following countries: Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Costa Rica and Mexico.

Source: OECD Country Policy Tracker.

Preparing for the recovery

Now is also the time to think about policies for the post-pandemic recovery. After the storm has passed, legitimate demands will once again need to be balanced against limited means. Strengthening social safety nets and reducing income and opportunity inequalities are long-standing challenges for Latin America. Making tax and benefit systems more progressive and effective, raising spending efficiency, reducing informality, and providing workers with the skills needed for today and tomorrow's labour market are further key structural policy recommendations that the OECD has made to a number of Latin American countries.

Informality and weak

competition – a deadly cocktail for growth and equity in emerging Latin America

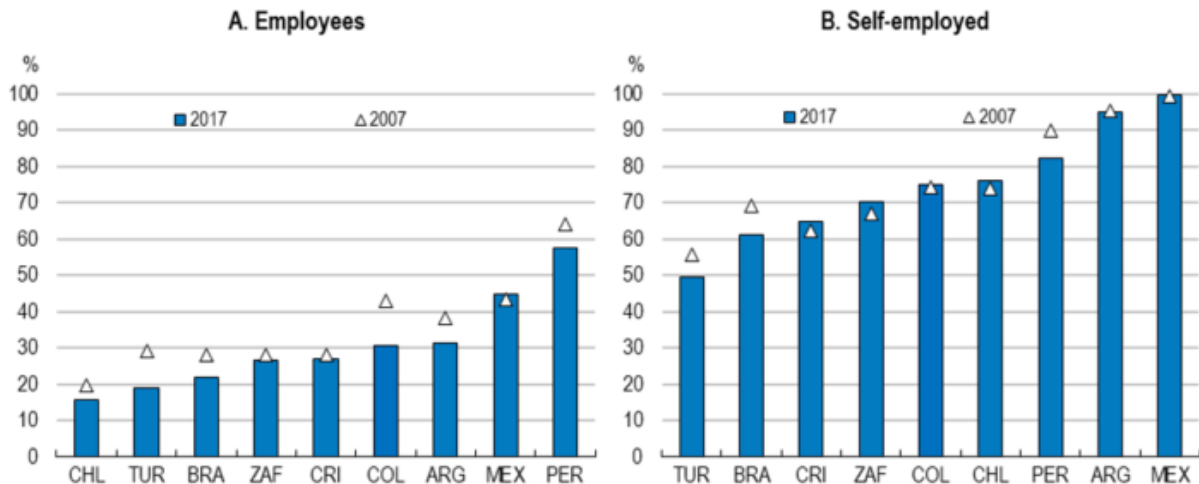
Category: Argentina, Brazil, Colombia, Latin America, Mexico, Uncategorized

written by oecdoscope | June 8, 2022

By Piritta Sorsa, Jens Arnold and Paula Garda, OECD Economics Department

Why is growth persistently low and so unevenly distributed in emerging Latin America compared to emerging Asia despite a huge potential? Potential growth is ranging around 2-3% in the region. Some refer to dependence on commodities, poor education, weak business environments or corruption as possible causes. But the question is deeper and more complex. A crucial factor for Latin America is low productivity, often related to a poor use of available resources. Across the region, many workers and significant amounts of capital are stuck in activities that are not efficient. The reasons for this are many, but two important forces stand out: high informality and weak competition.

Figure 1. Persistently high levels of informality characterise the LAC region
Informal workers in each category as % of employment



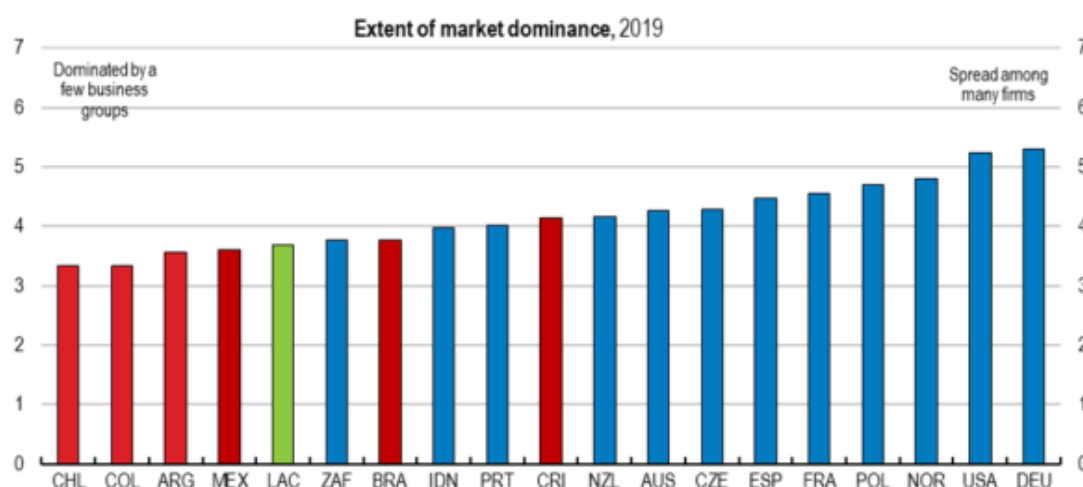
Note: Informality is defined to include: i) employees who do not pay health contributions; and ii) self-employed who do not pay social security contributions (Brazil, Chile and Turkey), or whose business is not registered (Argentina, Colombia, Costa Rica, Mexico, Peru and South Africa). Data for Turkey refer to persons aged 15 and more. Data for Argentina refer to selected urban areas (according to the National Statistical Authority (INDEC), LFS series published after the first quarter of 2007 and until the fourth quarter of 2015 must be considered with caution).

Source: OECD calculations based on the EPH for Argentina, the PNAD for Brazil, the CASEN for Chile, the GEIH for Colombia, the ECE for Costa Rica, the ENOE for Mexico, the ENAHO for Peru, the QLFS for South Africa and the HLFS for Turkey.

High and persistent informality in the region leaves workers more vulnerable and deprives them from social protection, thus contributing to inequality. For example, old age poverty in Colombia is high as low-skilled workers spend much of their working lives in informal employment, without pension contributions (OECD, 2019[1]). In Brazil and Argentina, informal workers retire later than others for the same reason, until they eventually reach the age to benefit from a non-contributory pension (OECD, 2019[2]; OECD, 2018[3]). In Mexico, poverty and informality are highly correlated among regions (OECD, 2019[4]). Informality also tends to maintain companies small with often low productivity as growing would face high costs of formalisation. Indeed, informal-sector productivity in the average LAC country is only between 25 and 75 percent of total labour productivity, and productivity decreases as informality rises (Loayza, 2018[5]). Informality also reduces the tax base for corporate and personal income taxes, reducing the capacity of the public sector to boost productivity and reduce inequality, and requires a higher tax burden on larger formal companies.

Weak competition is a second reason behind low productivity and is often reflected in high concentration (Figure 2). Entry barriers can protect existing activities that have little future growth potential at the cost of new dynamic and productive firms. Weak competition creates rents and lowers the share of wages in value-added worsening income distribution. Higher prices for consumers reduce purchasing power, affecting disproportionately low-income households.

Figure 2. Competition perceptions are low in LAC



Source: World Economic Forum, The Global Competitiveness Index 4.0.

Reducing informality for productivity and equity

The causes of informality are multiple. Informality is often a consequence of high costs of hiring formal workers, both wage and non-wage, especially in relation to labour productivity, given low educational outcomes.

Where high informality and weak competition coincide, as is the case in many Latin American countries, the consequences for both growth and equity can be particularly severe. For emerging Latin America to grow stronger and better share the fruits of growth, dealing with informality and competition should be priority.

Labour informality is often caused by rigid labour regulation. High firing costs of workers can discourage formal-sector hiring and promote inequality (Loayza, 2018[5]; OECD, 2018[6];

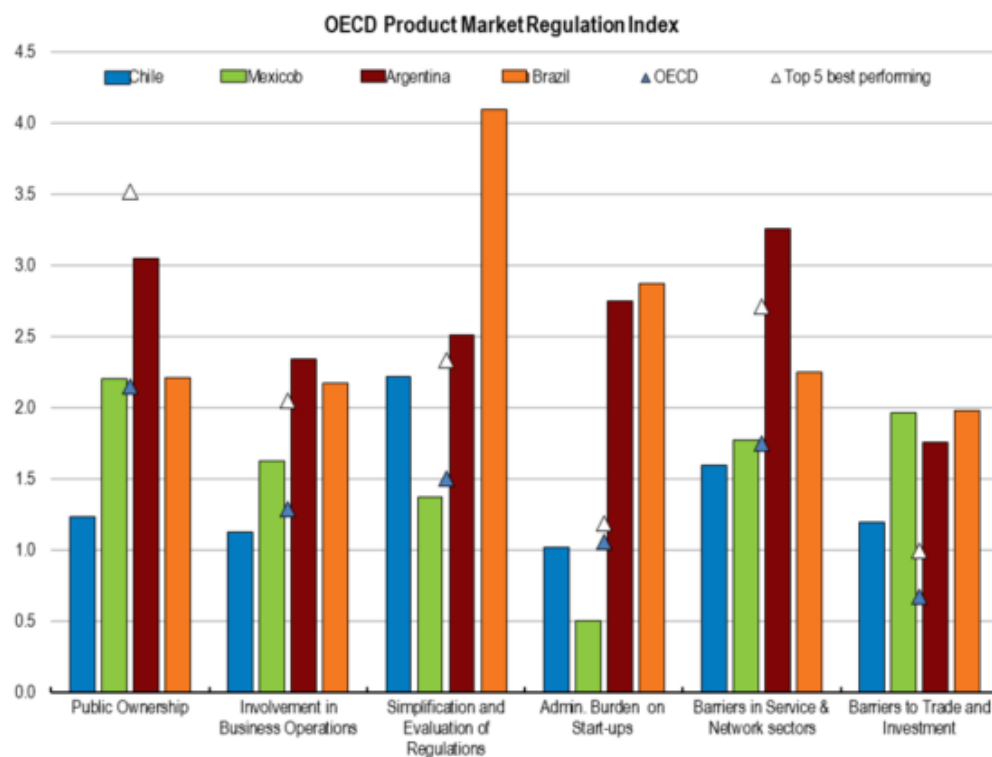
Heckman and Pages, 2000[7])). In Mexico, a labour reform in 2012 reduced hiring and firing costs, introduced different models of contracting and brought changes to the resolution of labour conflicts. Formal salaried jobs increased in the aftermath (OECD, 2019[4]). Minimum wages can be high compared to productivity or average wages keeping most workers informal. In Colombia, the minimum wage is close to the median wage and two thirds of workers earn less than that (OECD, 2019[1])). High payroll taxes can also have a detrimental effect on informality rates (Bobba, Flabbi and Levy, 2018[8])). Antón and Rastaletti (2018[9]) show how lowering employer social security contributions could lead to a substantial increase of labour formalisation. At a minimum, lower employer contributions could be offered temporarily for hiring low-skilled workers that enter the formal sector for the first time (OECD, 2017[10])). Lowering payroll taxes in Colombia helped reduce informality after the 2012 reform (Kugler et al., 2017[11]; Morales and Medina, 2016[12]; Fernández and Villar, 2016[13]; Bernal et al., 2017[14])). While incentives are crucial, better enforcement also needs to be part of any formalisation strategy.

Cumbersome administrative barriers and high taxes can keep companies informal. Latin America stands out in this respect (Figure 3). The tax burden on formal companies is also high compared to the OECD and positively associated to informality rates (Figure 4). To promote formalisation, regulatory and tax systems should be simple, with gradual increases in the tax burden as firms grow, so as not to discourage growth, and keep marginal tax rates as low as possible (Loayza, 2018[5])). These characteristics are crucial to encourage investment and employment in growing and larger companies.

Many countries in the region have implemented simplified schemes and reduced costs for small taxpayers with the aim of reducing informality. For example, Mexico introduced a special simplified regime for SMEs (Regimén de Incorporación Fiscal,

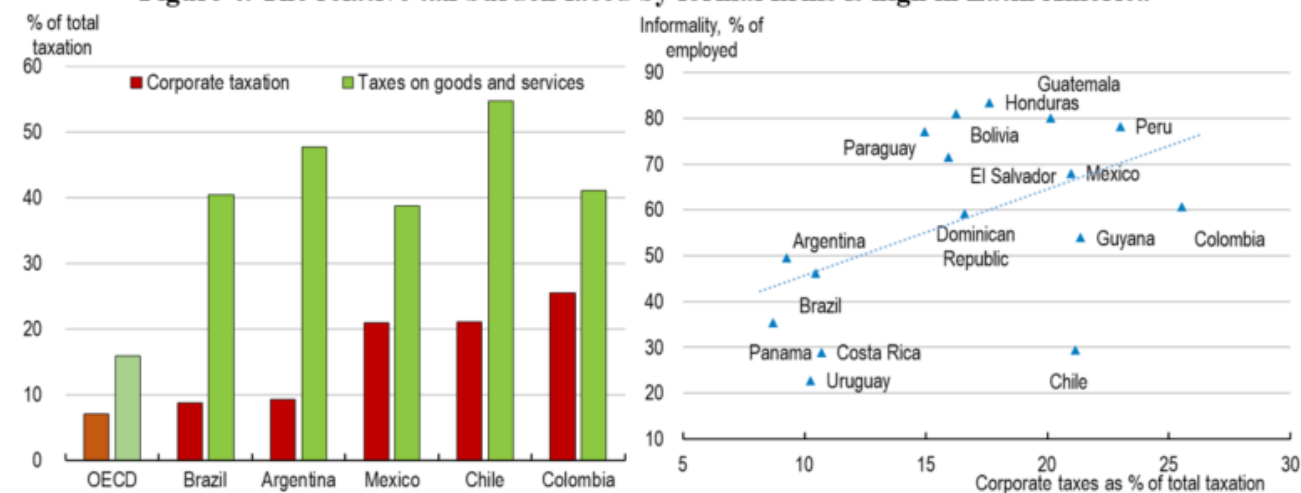
RIF) in 2014, which induced 1.5 million informal firms to join the tax system (OECD, 2018[15]). In Brazil, a special tax regime for microenterprises (Microempreendedor Individual, MEI) reduced the cost of formalisation and contributions to social security as of 2008. This regime helps explain the rising formalisation of the self-employed, including of women (OECD, 2012[16]). In Argentina, a simplified tax regime called Monotributo helped formalise self-employed workers. In Colombia, the tax reform in 2018 introduced a new simplified tax scheme (Simple) for small firms, and there are signs of positive impact on firm formalisation during 2019. At the same time, these regimes have to be designed carefully. When participation thresholds for special SME tax regimes are set too high, the effectiveness for formalisation declines while fiscal cost and threshold effects rise, as in the case of Brazil's Simples Nacional (OECD, 2018[3]). At times, simplifying the general tax regime may be preferable over creating exceptions.

Figure 3. Regulation burden is high in Latin American countries



Source: OECD, 2018 PMR database

Figure 4. The relative tax burden faced by formal firms is high in Latin America



Note: Informality is defined as those not contributing to pension system.

Source: OECD Revenue Statistics Latin American countries and IADB SIMS database

Education and skill levels are also linked with informality.

Countries with lowest informality rates tend to have significantly higher levels of human capital (Docquier, Müller and Naval, 2017[17]). It is not a coincidence that the decrease in informality over recent decades in Latin America went hand in hand with steady progress towards universal education. Evidence shows that improvements in education have been an important driving force behind falling informality in Colombia and Brazil (International Monetary Fund, 2018[18]; OECD, 2018[3]).

Increasing competition for productivity and equity

In Latin America, the same complex rules that discourage formal job creation often coincide with overly strict regulations that stifle competition. Competition is affected by how easily firms can enter or exit markets, by the extent of license requirements for starting or expanding a business and by competitive pressures from imports. Relatively high trade protection adds to this in a number Latin American countries, shielding domestic producers from international competition (OECD, 2018[3]). All of this tends to raise prices for consumers and keep resources in low-productivity activities where informality is widespread, for both workers and firms.

These circular relationships suggest that it is important for the public sector to take stock of burdens that even well-intended regulations and codes can impose on private activity. Disincentives for firms to go formal will inevitably preclude workers from the benefits of formal jobs, while unnecessary barriers to competition will keep more jobs in activities with limited potential for productivity and wage growth. To foster formal job creation, all parts of a country's regulatory framework should be simple and clear, promote competition, and facilitate both market entry and exit of firms (Loayza, Oviedo and Servén, 2005[19]).

Getting there

A comprehensive strategy is needed to deal with both informality and competition. It involves simplifying labour regulations, keeping administrative burdens and license requirements for companies as easy as possible, facilitating market entry and reducing trade barriers. Bringing more workers and firms into the formal sector would bring about broader social and labour protection, fairer wages, a more even tax burden and higher potential growth. Many of these policies are politically difficult as they involve dealing with vested interests and require appropriate sequencing. But that is not an excuse for inaction. These reforms should be accompanied with training and other active labour market policies for affected workers, as the informal sector often fulfils the function of absorbing excess labour supply, especially during transitions or economic recessions. Reforms to improve quality and relevance of education to raise worker productivity and policies that can raise investment and boost firm productivity should be also part of the strategy.

References

Antón, A. and A. Rasteletti (2018), Imposición al trabajo en contextos de alta informalidad laboral: Un marco teórico para la simulación de reformas tributarias y de seguridad social,

Inter-American Development Bank, Washington, D.C., <http://dx.doi.org/10.18235/0001467>.

Bernal, R. et al. (2017), "Switching from Payroll Taxes to Corporate Income Taxes: Firms' Employment and Wages after the Colombian 2012 Tax Reform", IDB Technical Note, No. 1268, Inter-American Development Bank.

Bobba, M., L. Flabbi and S. Levy (2018), "Labor Market Search, Informality and Schooling Investments", Interamerican Development Bank, <https://publications.iadb.org/en/publication/12928/labor-market-search-informality-and-schooling-investments>.

Docquier, F., T. Müller and J. Naval (2017), "Informality and Long-Run Growth", The Scandinavian Journal of Economics, Vol. 119/4, pp. 1040-1085, <http://dx.doi.org/10.1111/sjoe.12185>.

Fernández, C. and L. Villar (2016), "The Impact of Lowering the Payroll Tax on Informality in Colombia", No. 72, Fedesarrollo, <http://hdl.handle.net/11445/3300>.

Heckman, J. and C. Pages (2000), "The Cost of Job Security Regulation: Evidence from Latin American Labor Markets", NBER working paper, No. 7773, National Bureau of Economic Research, <http://dx.doi.org/10.3386/w7773>.

International Monetary Fund (2018), "Colombia: Selected Issues", Country Report, No. 18/129, <http://www.imf.org>.

Kugler, A. et al. (2017), "Do Payroll Tax Breaks Stimulate Formality? Evidence from Colombia's Reform", NBER Working Paper Series, <http://www.nber.org/papers/w23308>.

Loayza, N. (2018), "Informality : Why Is It So Widespread and How Can It Be Reduced?", Research and Policy Briefs, No. 20, World Bank, <http://documents.worldbank.org/curated/en/130391545228882358/Informality-Why-Is-It-So-Widespread-and-How-Can-It-Be-Reduced>.

Loayza, N., A. Oviedo and L. Servén (2005), "The impact of regulation on growth and informality – cross-country evidence", Policy, Research working paper World Bank 3623, <http://documents.worldbank.org/curated/en/212041468134383114/The-impact-of-regulation-on-growth-and-informality-cross-country-evidence>.

Morales, L. and C. Medina (2016), "Assessing the Effect of Payroll Taxes on Formal Employment: The Case of the 2012 Tax Reform in Colombia", Borradores de Economía, Banco de la República, <http://www.banrep.gov.co/en/borrador-971>.

OECD (2019), Economic Surveys: Colombia, <https://doi.org/10.1787/e4c64889-en>.

OECD (2019), Economic Surveys: Mexico, <https://doi.org/10.1787/a536d00e-en>.

OECD (2019), OECD Economic Surveys: Argentina 2019, OECD Publishing, Paris, <https://dx.doi.org/10.1787/0c7f002c-en>.

OECD (2018), Economic Surveys: Chile, https://doi.org/10.1787/eco_surveys-chl-2018-en.

OECD (2018), Getting it Right: Strategic Priorities for Mexico, OECD Publishing, Paris, <https://dx.doi.org/10.1787/9789264292062-en>.

OECD (2018), OECD Economic Surveys: Brazil 2018, OECD Publishing, Paris, https://dx.doi.org/10.1787/eco_surveys-bra-2018-en.

OECD (2017), OECD Economic Surveys: Argentina 2017: Multi-dimensional Economic Survey, OECD Publishing, Paris, https://dx.doi.org/10.1787/eco_surveys-arg-2017-en.

OECD (2012), Closing the Gender Gap ACT NOW: Brazil Country note, OECD, Paris, France, <http://www.oecd.org/gender/closingthegap.htm>.